Señores

**JUZGADO QUINTO (5°) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

[cmpl05bt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:cmpl05bt@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

|  |  |
| --- | --- |
| **REFERENCIA:** | VERBAL |
| **RADICACIÓN:** | 11001-40-03-005-2024-00721-00 |
| **DEMANDANTES:** | FABIO LEONARDO VILLARREAL GAMBA Y OTRA |
| **DEMANDADOS:** | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. Y OTROS. |

# ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de representante legal de la sociedad **G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S**.,identificada con NIT 900.701.533-7 y en tal calidad como apoderado general de **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO**, sociedad cooperativa de seguros, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, identificada con NIT 860.028.415-5, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., según consta en los certificados de existencia y representación legal que se anexan, en donde figura inscrito el poder general conferido a través de la Escritura Pública No. 2779, otorgada el 02 de diciembre de 2021 en la Notaría Decima (10°) del Círculo de Bogotá. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** instaurada por FABIO LEONARDO VILLARREAL GAMBA y otra y en contra de mi representada y otros, anunciando desde ahora que me opongo a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda, de conformidad con las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:

**CONSIDERACIÓN PRELIMINAR**

**SOLICITUD SENTENCIA ANTICIPADA**

Para iniciar, es preciso indicar que el artículo 278 del Código General del Proceso, dispuso con claridad el deber que le asiste al juez de proferir sentencia anticipada cuando encuentre probada la transacción y la cosa juzgada en cualquier fase del proceso, así:

***“ARTÍCULO 278. CLASES DE PROVIDENCIAS.****Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.*

*Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.*

*En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:*

*1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.*

*2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.*

*3****. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción****, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.”*

Es por esto, que respetuosamente solicito al Honorable Despacho emitir sentencia anticipada en el presente caso, como quiera que el 23 de diciembre de 2022, la Equidad Seguros Generales O.C. y el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba, suscribieron un contrato de transacción. Lo anterior, con el fin de resolver el conflicto surgido con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 4 de octubre de 2022, en el que se vio involucrado el vehículo de placas RCU-413.

Así las cosas, es evidente que las partes, entiéndase, Rosmary Pamplona Farfán en calidad de propietaria del vehículo de placas RCU-413 y quien ostenta la calidad de tomadora y asegurada en la póliza Seguro Plus AA000909, la conductora del vehículo asegurado, La Equidad Seguros Generales O.C. y el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamboa en calidad de reclamante, se celebró un acuerdo transaccional debidamente firmado y autenticado con fecha del 23 de diciembre de 2022, dentro del cual se indicó tácitamente que la indemnización pagada por la compañía aseguradora corresponde a una indemnización integral que satisface todos los daños y perjuicios ocasionados en el accidente de tránsito ocurrido el 4 de octubre de 2022 y con el cual ciertamente el señor Villarreal Gamboa declaró cancelada la obligación de resarcir perjuicios liberando de cualquier acción de responsabilidad a La Equidad Seguros Generales O.C., así como a Rosmary Pamplona Farfán y a la conductora del vehículo de placas RCU-413. Así mismo en dicho acuerdo transaccional se pactó que el señor Villareal Gamboa se abstendrá de iniciar o continuar cualquier acción legal en contra de las personas antes citadas, renunciando y desistiendo de las acciones y derechos que confieren las leyes civiles y penales para iniciar acción alguna que persiga el pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales y con el cual se busque el pago de los perjuicios que ya le fueron resarcidos con el acuerdo firmado.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, con el contrato de transacción antes citado, en el presente proceso está probada la existencia de una transacción. En términos del artículo 2483 del Código Civil, el acuerdo transaccional produjo efecto de cosa juzgada. Es decir, que como el acuerdo transaccional 23 de diciembre de 2022 tuvo por objeto indemnizar de manera integral al señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba de los perjuicios sufridos con ocasión al accidente ocurrido el 04 de octubre de 2022, no es posible ventilar el presente asunto en trámite judicial, pues las partes convinieron terminarlo por vía extrajudicial desde el 23 de diciembre de 2022. Por ese motivo, el Despacho en los términos del artículo 278 del Código General del Proceso no tendrá un camino distinto a terminar el proceso, al encontrarse probado no sólo la transacción sino la cosa juzgada, pues el asunto que se pretende ventilar mediante proceso judicial ya fue resuelto mediante acuerdo transaccional. Con base en lo anterior, solicito respetuosamente a su Despacho, se sirva proferir sentencia anticipada por atendiendo al numeral tercero del artículo 278 del C.G.P. en los términos ya indicados.

# CAPÍTULO I

# CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

**PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS**

**FRENTE AL HECHO 1.:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin perjuicio de lo indicado, al revisar las piezas documentales que acompañan la demanda se encuentra el informe policial de accidente de tránsito A001515630 en el cual se consignó un hecho de tránsito acaecido del 4 de octubre de 2022 y en el que se vieron involucrados el vehículo de placas RCU-143 y la motocicleta de placas LOD-49C. Cabe agregar que dentro de dicho informe se incluyó un bosquejo topográfico en el que no se observa diagramado el vehículo automotor de placas RCU-413 en tanto fue movido de su posición final. Sin embargo, debe considerar el Despacho desde este momento que la hipótesis planteada por el agente de tránsito, que establecida sin siquiera conocer la posición final de los vehículos y mucho menos conoció de manera directa el hecho pues no presencio el evento. En tal sentido, no existe prueba cierta que acredite que los daños alegados por la parte demandante ocurrieron como consecuencia de las actuaciones de la conductora del vehículo de placas RCU-413. Pues, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que pruebe la hipótesis planteada en el escrito de demanda y por esa razón, no podrá confirmarse la existencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados.

**FRENTE AL HECHO 2.:**  No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

**FRENTE AL HECHO 3.:** No es cierto como lo describe el demandante en el hecho. Se aclara al despacho que es cierto lo indicado con relación a la existencia de la Póliza Seguro Autoplus AA000909 expedida por La Equidad Seguros Generales O.C. la cual contó con una vigencia desde el 16 de octubre de 2021 hasta el 16 de octubre de 2022 y en la que figuró como tomadora y asegurada la señora Rosmary Pamplona Farfán. Así mismo, en dicha póliza se contrató en amparo de responsabilidad civil extracontractual. No obstante, no es cierto que dicha póliza ofrezca cobertura para el evento, atendiendo a que no se ha acreditado que efectivamente el accidente del 4 de octubre de 2022, fue consecuencia del actuar de la señora Pamplona Farfán, en tanto las circunstancias de tiempo, modo y lugar no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que pruebe la hipótesis planteada en el escrito de demanda y por esa razón, no podrá confirmarse la existencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados. Así las cosas, como en este asunto se incumplieron las cargas imperativas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, no existe obligación condicional de la aseguradora.

**FRENTE AL HECHO 4.:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin perjuicio de lo indicado, al revisar las piezas documentales que acompañan la demanda se encuentra el informe policial de accidente de tránsito A001515630 en el cual se consignó un hecho de tránsito acaecido del 4 de octubre de 2022 y en el que se vieron involucrados el vehículo de placas RCU-143 y la motocicleta de placas LOD-49C. Cabe agregar que dentro de dicho informe se incluyó un bosquejo topográfico en el que no se observa diagramado el vehículo automotor de placas RCU-413 en tanto fue movido de su posición final. Sin embargo, debe considerar el Despacho desde este momento que la hipótesis planteada por el agente de tránsito, que establecida sin siquiera conocer la posición final de los vehículos y mucho menos conoció de manera directa el hecho pues no presencio el evento. En tal sentido, no existe prueba cierta que acredite que los daños alegados por la parte demandante ocurrieron como consecuencia de las actuaciones de la conductora del vehículo de placas RCU-413. Pues, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que pruebe la hipótesis planteada en el escrito de demanda y por esa razón, no podrá confirmarse la existencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados.

**FRENTE AL HECHO 5.:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin perjuicio de lo indicado, al revisar las piezas documentales que acompañan la demanda se encuentra el informe policial de accidente de tránsito A001515630 en el cual se consignó un hecho de tránsito acaecido del 4 de octubre de 2022 y en el que se vieron involucrados el vehículo de placas RCU-143 conducido por Yuly Paola García y la motocicleta de placas LOD-49C conducida por Fabio Leonardo Villarreal, fue diligenciado luego de que uno de los vehículos hubiera sido movido de su posición final. Igualmente se observa que dentro de dicho informe se incluyó un bosquejo topográfico en el que no se observa diagramado el vehículo automotor de placas RCU-413, no obstante, dicho informe de accidente de tránsito constituye una mera hipótesis planteada por un funcionario público que no conoció de manera directa el hecho pues no presencio el evento y tampoco conoció la posición final de los vehículos que le permitiera establecer una hipótesis válida. En tal sentido, no existe prueba cierta que acredite que los daños alegados por la parte demandante ocurrieron como consecuencia de las actuaciones de la conductora del vehículo de placas RCU-413. Pues, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que pruebe la hipótesis planteada en el escrito de demanda y por esa razón, no podrá confirmarse la existencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados.

**FRENTE AL HECHO 6.:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

No obstante, se advierte que al revisar los anexos documentales obrantes en el plenario no se encuentra un documento o constancia de atenciones en los términos que se describen por la parte demandante. Adicionalmente se advierte que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el hecho de tránsito no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que sustente la hipótesis planteada en el escrito de demanda y por esa razón, no podrá confirmarse la existencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados.

**FRENTE AL HECHO 7:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

No obstante, se advierte que al revisar los anexos documentales obrantes en el plenario no se encuentra un documento o constancia de atenciones en los términos que se describen por la parte demandante. Adicionalmente se advierte que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el hecho de tránsito no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que sustente la hipótesis planteada en el escrito de demanda y por esa razón, no podrá confirmarse la existencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados.

**FRENTE AL HECHO 8.:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

No obstante, se advierte que al revisar los anexos documentales obrantes en el plenario se observa una valoración realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal con fecha del 24 de abril de 2023, en el cual se establece que el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba cuenta con arcos de movilidad de mano derecha conservados y que no hay compromiso de las funciones de pinza ni de presión, adicionalmente se advierte que no subsisten secuelas medico legales.

**FRENTE AL HECHO 9.:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

No obstante, se advierte que al revisar los anexos documentales obrantes en el plenario se observa una valoración realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal con fecha del 24 de enero de 2023 en la cual se consideró la existencia de secuelas medico legales con carácter por definir sin que se haya emitido dentro de la misma una secuela médico legal requiriendo una nueva valoración, de allí que el 24 de abril de 2023, se haya adelantado una nueva valoración en la cual se establece que el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba cuenta con arcos de movilidad de mano derecha conservados y que no hay compromiso de las funciones de pinza ni de presión, adicionalmente se advierte que no subsisten secuelas medico legales.

**FRENTE AL HECHO 10.:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

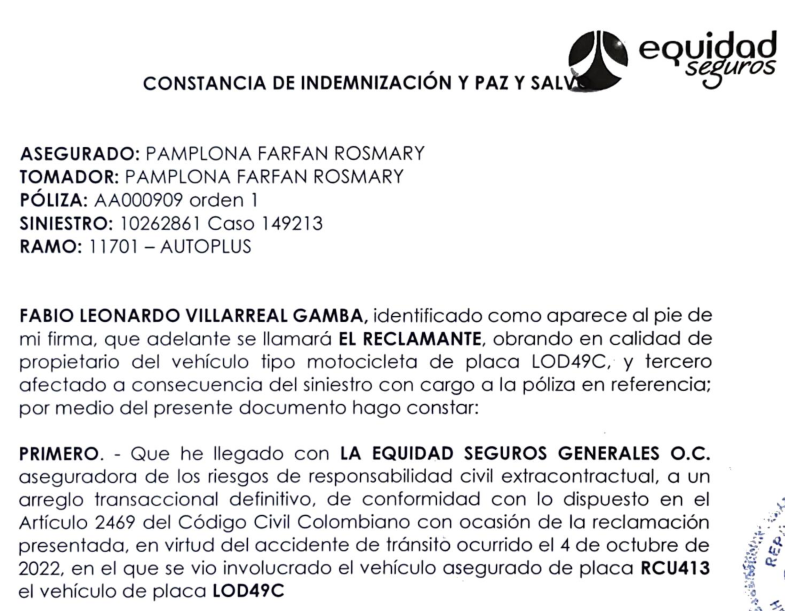
**FRENTE AL HECHO 11.:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

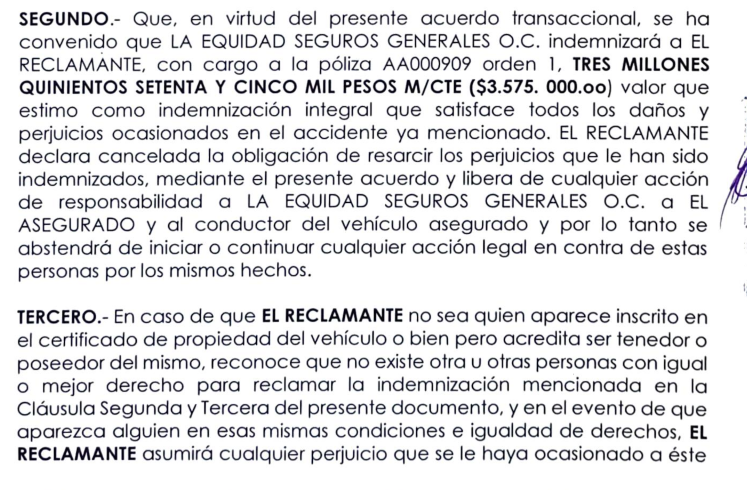
**FRENTE AL HECHO 12.:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

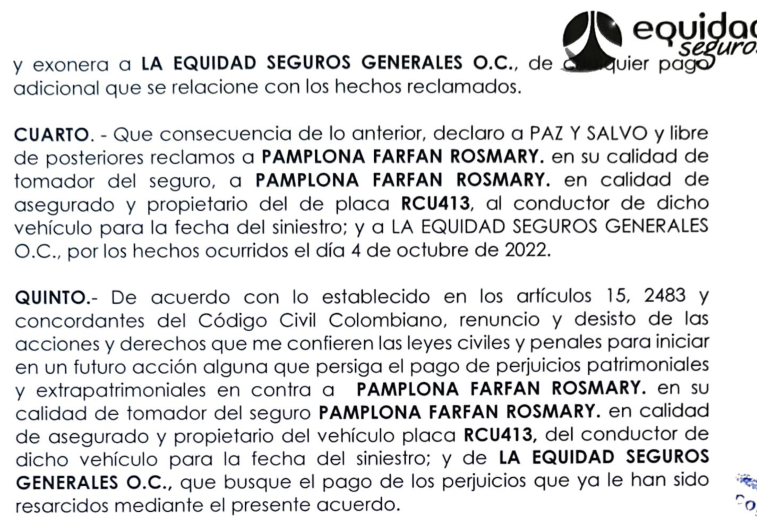
Sin perjuicio de lo anterior se observa dentro de las documentales obrantes en el plenario un documento con el cual se pretende probar la ocupación laboral del demandante y un salario percibido la cual debe someterse a ratificación en las etapas procesales subsiguientes y que carece de valor alguno hasta ahora. Frente a dicho documento es adecuado traer al presente escrito que hace mención acerca de un contrato a término fijo de 3 meses con fecha de inicio del 16 de junio de 2022 hasta el 19 de octubre de 2022, es decir se extendió por 15 días después de la ocurrencia del hecho de tránsito.

**FRENTE AL HECHO 13.:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte Demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

**FRENTE AL HECHO 14.:** No es cierto como se describe en el hecho. Se brinda claridad al Despacho indicando el 23 de diciembre de 2022, la Equidad Seguros Generales O.C. y el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba, celebraron un contrato de transacción. Lo anterior, con el fin de resolver el conflicto surgido con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 04 de octubre de 2022, en el que se vio involucrado el vehículo de placas RCU-413. El referido acuerdo de indemnización y paz y salvo se pactó en los siguientes términos:







Así las cosas, es evidente que las partes, entiéndase, Rosmary Pamplona Farfán en calidad de propietaria del vehículo de placas RCU-413 y quien ostenta la calidad de tomadora y asegurada en la póliza Seguro Plus AA000909, la conductora del vehículo asegurado, La Equidad Seguros Generales O.C. y el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamboa en calidad de reclamante, se celebró un acuerdo transaccional debidamente firmado y autenticado con fecha del 23 de diciembre de 2022, dentro del cual se indicó tácitamente que la indemnización pagada por la compañía aseguradora corresponde a una indemnización integral que satisface todos los daños y perjuicios ocasionados en el accidente de tránsito ocurrido el 4 de octubre de 2022 y con el cual ciertamente el señor Villarreal Gamboa declaró cancelada la obligación de resarcir perjuicios liberando de cualquier acción de responsabilidad a La Equidad Seguros Generales O.C., así como a Rosmary Pamplona Farfán y a la conductora del vehículo de placas RCU-413. Así mismo en dicho acuerdo transaccional se pactó que el señor Villareal Gamboa se abstendrá de iniciar o continuar cualquier acción legal en contra de las personas antes citadas, renunciando y desistiendo de las acciones y derechos que confieren las leyes civiles y penales para iniciar acción alguna que persiga el pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales y con el cual se busque el pago de los perjuicios que ya le fueron resarcidos con el acuerdo firmado.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, con el contrato de transacción antes citado, en el presente proceso está probada la existencia de una transacción. En términos del artículo 2483 del Código Civil, el acuerdo transaccional produjo efecto de cosa juzgada. Es decir, que como el acuerdo transaccional 23 de diciembre de 2022 tuvo por objeto indemnizar de manera integral al señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba de los perjuicios sufridos con ocasión al accidente ocurrido el 04 de octubre de 2022, no es posible ventilar el presente asunto en trámite judicial, pues las partes convinieron terminarlo por vía extrajudicial desde el 23 de diciembre de 2022.

Por ese motivo, el Despacho en los términos del artículo 278 del Código General del Proceso no tendrá un camino distinto a terminar el proceso, al encontrarse probado no sólo la transacción sino la cosa juzgada, pues el asunto que se pretende ventilar mediante proceso judicial ya fue resuelto mediante acuerdo transaccional. Con base en lo anterior, solicito respetuosamente a su Despacho, se sirva proferir sentencia anticipada por atendiendo al numeral tercero del artículo 278 del C.G.P.

**FRENTE AL HECHO 15.:** Es cierto que el 19 de octubre de 2023 se llevó a cabo la audiencia extrajudicial. Sin embargo, de manera posterior, el 23 de diciembre de 2022, la Equidad Seguros Generales O.C. y el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba, celebraron un contrato de transacción. Lo anterior, con el fin de resolver el conflicto surgido con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 04 de octubre de 2022, en el que se vio involucrado el vehículo de placas RCU-413.

**FRENTE AL HECHO 16.:** No es cierto lo manifestado en el hecho. Se brinda claridad al Despacho indicando el 23 de diciembre de 2022, la Equidad Seguros Generales O.C. y el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba, celebraron un contrato de transacción. Lo anterior, con el fin de resolver el conflicto surgido con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 04 de octubre de 2022, en el que se vio involucrado el vehículo de placas RCU-413.

Las partes, entiéndase, Rosmary Pamplona Farfán en calidad de propietaria del vehículo de placas RCU-413 y quien ostenta la calidad de tomadora y asegurada en la póliza Seguro Plus AA000909, la conductora del vehículo asegurado, La Equidad Seguros Generales O.C. y el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamboa en calidad de reclamante, celebraron un acuerdo transaccional debidamente firmado y autenticado con fecha del 23 de diciembre de 2022, dentro del cual se indicó tácitamente que la indemnización pagada por la compañía aseguradora corresponde a una indemnización integral que satisface todos los daños y perjuicios ocasionados en el accidente de tránsito ocurrido el 4 de octubre de 2022 y con el cual ciertamente el señor Villarreal Gamboa declaró cancelada la obligación de resarcir perjuicios liberando de cualquier acción de responsabilidad a La Equidad Seguros Generales O.C., así como a Rosmary Pamplona Farfán y a la conductora del vehículo de placas RCU-413. Así mismo en dicho acuerdo transaccional se pactó que el señor Villareal Gamboa se abstendrá de iniciar o continuar cualquier acción legal en contra de las personas antes citadas, renunciando y desistiendo de las acciones y derechos que confieren las leyes civiles y penales para iniciar acción alguna que persiga el pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales y con el cual se busque el pago de los perjuicios que ya le fueron resarcidos con el acuerdo firmado.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, con el contrato de transacción antes citado, en el presente proceso está probada la existencia de una transacción. En términos del artículo 2483 del Código Civil, el acuerdo transaccional produjo efecto de cosa juzgada. Es decir, que como el acuerdo transaccional 23 de diciembre de 2022 tuvo por objeto indemnizar de manera integral al señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba de los perjuicios sufridos con ocasión al accidente ocurrido el 04 de octubre de 2022, no es posible ventilar el presente asunto en trámite judicial, pues las partes convinieron terminarlo por vía extrajudicial desde el 23 de diciembre de 2022.

**CAPÍTULO II**

# PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda, por cuanto las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad. Como quiera que se celebró un acuerdo transaccional por medio del cual se indemnizó de manera integral al señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba de los perjuicios sufridos con ocasión al accidente ocurrido el 4 de octubre de 2022 y con el cual el demandante renuncio y desistió de las acciones y derechos que confieren las leyes civiles y penales para iniciar acción alguna que persona el pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales en contra de Rosmary Pamplona Farfán, la conductora del vehículo palcas RCU-413 para el día del hecho y claro está La Equidad Seguros Generales O.C. atendiendo a que ya le fueron resarcidos integralmente los perjuicios por el evento mediante dicho acuerdo. Sin perjuicio de lo anterior, al hacer la narración de los supuestos hechos se pretende imputar una supuesta responsabilidad civil extracontractual, la cual como se establecerá dentro del proceso, no se estructuró. Toda vez que en estos casos impera el principio de la carga de la prueba tanto de la supuesta culpa, del daño, de la cuantía del supuesto detrimento y el nexo de causalidad entre uno y el otro.

Aunado a lo anterior, no se vislumbran los elementos *sine qua non*para declarar una responsabilidad civil en el caso que nos ocupa. Lo anterior, toda vez que primero, no existe prueba del nexo de causalidad entre las conductas de la señora Yuly Paola García Pamplona y el daño que hoy reclama la parte Demandante; Segundo, la póliza en mención no podrá ser afectada debido a que incumplieron las cargas imperativas de que trata el artículo 1077 del C. Co. y finalmente, en el caso concreto ya se ha presentado un pago a título de indemnización integral a favor del señor Fabio Leonardo Villarreal.

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 1:** ME OPONGO a la declaratoria de responsabilidad civil en cabeza de las demandadas, por los presuntos daños y perjuicios que se hayan causado como consecuencia del accidente ocurrido el 4 de octubre de 2022, por cuanto no existe prueba que acredite que la ocurrencia del accidente fue atribuible a la conductora del vehículo de placas RCU-413. Teniendo en cuenta que, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que pruebe la hipótesis planteada en la demanda y por esa razón, no podrá confirmarse la existencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados.

Sin perjuicio de que no sea posible declarar la responsabilidad de la señora Yuly Paola García Pamplina y de la señora Rosmary Pamplona Farfán, lo cierto es que el 23 de diciembre de 2022 se celebró un contrato de transacción, en el que el señor Fabio Leonardo Villarreal declaró a paz y salvo a las demandadas por los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2022.

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 2:** ME OPONGO a que la declaratoria de indemnización en cabeza de mi representada, por los presuntos daños y perjuicios que se hayan causado como consecuencia del accidente ocurrido el 4 de octubre de 2022, y con ocasión de la existencia de la Póliza AA000909. Lo anterior atendiendo a que (i) en este caso La Equidad Seguros Generales O.C. llegó a un acuerdo transaccional definitivo el 23 de diciembre de 2022 con el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba, (ii) no se ha acreditado la ocurrencia del siniestro, en tanto, no está probada la responsabilidad y (iii) debido a que el señor Villarreal Gamba ya recibió una indemnización integral con ocasión al contrato de seguro cualquier reconocimiento con cargo a la póliza de seguro contraviene el principio indemnizatorio del contrato de seguro, el cual no puede dar origen a obtener una ganancia de él dejando en claro que el señor Villarreal ya fue indemnizado y declaró que no existían personas con mejor o igual derecho para reclamar la indemnización que recibió. En tal sentido las sumas pretendidas por la parte demandante son totalmente improcedentes y se busca con ellas un enriquecimiento sin justa causa en detrimento del patrimonio de las demandadas.

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 3:** ME OPONGO a que se declare que los demandados deban acudir al pago de perjuicios en los términos descritos en la demanda, por los presuntos daños y perjuicios que se hayan causado como consecuencia del accidente ocurrido el 4 de octubre de 2022, y con ocasión de la existencia de la Póliza AA000909. Lo anterior atendiendo a que (i) en este caso La Equidad Seguros Generales O.C. llegó a un acuerdo transaccional definitivo el 23 de diciembre de 2022 con el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba, (ii) no se ha acreditado la ocurrencia del siniestro, en tanto, no está probada la responsabilidad y (iii) debido a que el señor Villarreal Gamba ya recibió una indemnización integral con ocasión al contrato de seguro cualquier reconocimiento con cargo a la póliza de seguro contraviene el principio indemnizatorio del contrato de seguro, el cual no puede dar origen a obtener una ganancia de él dejando en claro que el señor Villarreal ya fue indemnizado y declaró que no existían personas con mejor o igual derecho para reclamar la indemnización que recibió. En tal sentido las sumas pretendidas por la parte demandante son totalmente improcedentes y se busca con ellas un enriquecimiento sin justa causa en detrimento del patrimonio de las demandadas.

Sin perjuicio de lo interior y conforme se estableció especialmente en las cláusulas SEGUNDA, TERCERA y CUARTA del acuerdo transaccional se extrae que las partes, entiéndase, Rosmary Pamplona Farfán en calidad de propietaria del vehículo de placas RCU-413 y quien ostenta la calidad de tomadora y asegurada en la póliza Seguro Plus AA000909, la conductora del vehículo asegurado, La Equidad Seguros Generales O.C. y el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamboa en calidad de reclamante, se celebró un acuerdo transaccional debidamente firmado y autenticado con fecha del 23 de diciembre de 2022, dentro del cual se indicó tácitamente que la indemnización pagada por la compañía aseguradora corresponde a una indemnización integral que satisface todos los daños y perjuicios ocasionados en el accidente de tránsito ocurrido el 4 de octubre de 2022 y con el cual ciertamente el señor Villarreal Gamboa declaró cancelada la obligación de resarcir perjuicios liberando de cualquier acción de responsabilidad a La Equidad Seguros Generales O.C., así como a Rosmary Pamplona Farfán y a la conductora del vehículo de placas RCU-413. Así mismo en dicho acuerdo transaccional se pactó que el señor Villareal Gamboa se abstendrá de iniciar o continuar cualquier acción legal en contra de las personas antes citadas, renunciando y desistiendo de las acciones y derechos que confieren las leyes civiles y penales para iniciar acción alguna que persiga el pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales y con el cual se busque el pago de los perjuicios que ya le fueron resarcidos con el acuerdo firmado.

Finalmente y de manera subsidiaria no puede dejarse de lado el hecho de la parte demandante ha incumplido con las cargas que le impone el artículo 1077 del C.Cio y en tal sentido tampoco habría lugar a declarar la prosperidad de sus pretensiones.

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 4:** ME OPONGO a la declaratoria de responsabilidad civil en cabeza de las demandas, por los presuntos daños y perjuicios que se hayan causado como consecuencia del accidente ocurrido el 4 de octubre de 2022 a Sandra María Jiménez Ávila, por cuanto dicha persona carece de legitimación en la causa por activa dentro del trámite procesal, sin que obre sustento documental que corrobore la presunta relación que existe con el señor Fabio Leonardo Villarreal y ante dicha circunstancia es claro que no cuenta con las calidades para pretender cualquier suma en el caso de marras. No obstante se deja constancia acerca del contenido del acuerdo transaccional firmado el 23 de diciembre de 2022 y en el cual se estableció tácitamente en su cláusula tercera en donde el entonces reclamante y hoy demandante Fabio Leonardo Villarreal reconoció que no existe otra u toras personas con igual o mejor derecho para reclamar la indemnización que finalmente le fue pagada y que está contenida en la cláusula segunda y tercera del mentado documento y en todo caso en el evento de que aparezca alguien en esas mismas condiciones e igualdad de derechos el citado señor asumirá cualquier perjuicio que se le haya ocasionado a este, exonerando a mi representada de cualquier pago adicional que se relacione con los hechos acaecidos el 4 de octubre de 2022. Es así que de una parte no existe prueba de que la señora Jiménez sea su compañera permanente, y por otro lado declaró el 23 de diciembre de 2022, que no existía persona con igual o mejor derecho, pero en todo caso se comprometió a responder cualquier perjuicio a otra persona que reclame un mejor o igual derecho.

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 5:** ME OPONGO a que la declaratoria de indemnización en cabeza de mi representada, por los presuntos daños y perjuicios que se hayan causado como consecuencia del accidente ocurrido el 4 de octubre de 2022, y con ocasión de la existencia de la Póliza AA000909. Lo anterior atendiendo a que (i) en este caso La Equidad Seguros Generales O.C. llegó a un acuerdo transaccional definitivo el 23 de diciembre de 2022 con el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba, (ii) no se ha acreditado la ocurrencia del siniestro, en tanto, no está probada la responsabilidad y (iii) debido a que el señor Villarreal Gamba ya recibió una indemnización integral con ocasión al contrato de seguro cualquier reconocimiento con cargo a la póliza de seguro contraviene el principio indemnizatorio del contrato de seguro, el cual no puede dar origen a obtener una ganancia de él dejando en claro que el señor Villarreal ya fue indemnizado y declaró que no existían personas con mejor o igual derecho para reclamar la indemnización que recibió. En tal sentido las sumas pretendidas por la parte demandante son totalmente improcedentes y se busca con ellas un enriquecimiento sin justa causa en detrimento del patrimonio de las demandadas.

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 6:** ME OPONGO a la declaratoria de responsabilidad civil en cabeza de las demandas, por los presuntos daños y perjuicios que se hayan causado como consecuencia del accidente ocurrido el 4 de octubre de 2022, y con ocasión de la existencia de la Póliza AA000909 por cuanto Sandra María Jiménez Ávila carece de legitimación en la causa por activa dentro del trámite procesal, sin que obre sustento documental que corrobore la presunta relación que existe con el señor Fabio Leonardo Villarreal y ante dicha circunstancia es claro que no cuenta con las calidades para pretender cualquier suma en el caso de marras. No obstante se deja constancia acerca del contenido del acuerdo transaccional firmado el 23 de diciembre de 2022 y en el cual se estableció tácitamente en su cláusula tercera en donde el entonces reclamante y hoy demandante Fabio Leonardo Villarreal reconoció que no existe otra u toras personas con igual o mejor derecho para reclamar la indemnización que finalmente le fue pagada y que está contenida en la cláusula segunda y tercera del mentado documento y en todo caso en el evento de que aparezca alguien en esas mismas condiciones e igualdad de derechos el citado señor asumirá cualquier perjuicio que se le haya ocasionado a este, exonerando a mi representada de cualquier pago adicional que se relacione con los hechos acaecidos el 4 de octubre de 2022. Es así que de una parte no existe prueba de que la señora Jiménez sea su compañera permanente, y por otro lado declaró el 23 de diciembre de 2022, que no existía persona con igual o mejor derecho, pero en todo caso se comprometió a responder cualquier perjuicio a otra persona que reclame un mejor o igual derecho.

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 7:** ME OPONGO por cuanto las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad. Como quiera que al hacer la narración de los supuestos hechos se pretende imputar una supuesta responsabilidad civil extracontractual, la cual como se establecerá dentro del proceso, no se estructuró. Toda vez que en estos casos impera el principio de la carga de la prueba tanto de la supuesta culpa, del daño, de la cuantía del supuesto detrimento y el nexo de causalidad entre uno y el otro. Finalmente, se observa que como consecuencia del hecho acaecido el 4 de octubre de 2022 se firmó un acuerdo entre el demandante Villarreal Gamba y las demandadas, en donde se pagó una indemnización integral de perjuicios lo que se suma a la inexistencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados.

**a). Oposición al reconocimiento del DAÑO EMERGENTE:** ME OPONGO a que se condene a los demandados al pago de suma alguna derivada del daño emergente solicitado, puesto que, no hay prueba dentro del expediente de los gastos en que se incurrió con ocasión al incidente de fecha 4 de octubre de 2022. En consecuencia, se trata de una mera expectativa que atenta contra el carácter cierto del perjuicio y, por tanto, no puede presumirse valor alguno para indemnizar lo solicitado por la parte Demandante. En ese sentido, al no existir prueba siquiera sumaria que permita acreditar las sumas solicitadas, las mismas no pueden ser reconocidas dentro de este proceso.

**b). Oposición al reconocimiento del LUCRO CESANTE:** ME OPONGOa que se condene a los demandados al pago de suma alguna derivada del lucro cesante solicitado por la parte Demandante, por cuanto, para su reconocimiento resultaba necesario aportar medios probatorios tendientes a acreditar el presunto ingreso mensual fijo que recibía como remuneración el señor Fabio Leonardo Villarreal por sus actividades laborales para la fecha del accidente y con posterioridad al mismo. De modo qué siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. Además, es claro que las pretensiones encaminadas a obtener un reconocimiento por este concepto no están llamadas a prosperar, puesto que no siguen los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual del Lucro Cesante.

**c). Oposición al reconocimiento del PERJUICIO POR HECHO DAÑOSO:** No hay lugar a reconocimiento alguno por dicho concepto, pues en el presente caso no solo es jurídicamente inadmisible predicar responsabilidad alguna en cabeza de los demandados por concepto de perjuicio por hecho dañoso. Sino que, además, tampoco es jurídicamente viable imponer condena alguna tendiente al pago por concepto de esta tipología de perjuicio, toda vez que el mismo en la jurisdicción ordinaria especialidad civil no constituye un daño resarcible. Adicionalmente de las descripciones que se hacen frente a este presunto perjuicio se observa que las mismas se estructuran bajo el cálculo del tiempo de duración del presunto tratamiento médico para la recuperación que ha realizado el demandante, circunstancia que da pie a considerar que se incluye una nueva pretensión a título de lucro cesante, el cual ya ha sido tratado en el acápite anterior y en todo caso no goza de sustento para su reconocimiento. En conclusión, sin perjuicio de que en el asunto que nos ocupa no existe responsabilidad imputable al extremo pasivo de la litis, deberá tomar en consideración el Despacho que, el reconocimiento de perjuicio por hecho dañoso es un perjuicio jurídicamente inviable, toda vez que el mismo en la jurisdicción ordinaria especialidad civil, así como en otras jurisdicciones no constituye un daño resarcible. Es en razón de ello que no podrá imponerse condena alguna por este concepto el cual en todo caso contempla una suma exorbitante e injustificada de $82.849.892

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 8:** ME OPONGO por cuanto las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad. Como quiera que al hacer la narración de los supuestos hechos se pretende imputar una supuesta responsabilidad civil extracontractual, la cual como se establecerá dentro del proceso, no se estructuró. Toda vez que en estos casos impera el principio de la carga de la prueba tanto de la supuesta culpa, del daño, de la cuantía del supuesto detrimento y el nexo de causalidad entre uno y el otro. Finalmente, se observa que como consecuencia del hecho acaecido el 4 de octubre de 2022 se firmó un acuerdo entre el demandante Villarreal Gamba y las demandadas, en donde se pagó una indemnización integral de perjuicios lo que se suma a la inexistencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados.

**A). Oposición al reconocimiento del DAÑO MORAL:** No hay lugar a reconocimiento alguno por concepto de daños morales, dado que no existe responsabilidad en cabeza de la parte pasiva dentro del presente asunto. Además, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es exorbitante y en tal sentido, en el improbable e hipotético caso que dicho concepto sea reconocido, no hay lugar al pago de suma alguna que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Pues, solicitar 40 SMLMV en favor de el señor Fabio Leonardo Villarreal, resulta exorbitante. Debe señalarse que ni siquiera en el evento de lesiones en donde se presentan secuelas que comportan una pérdida de capacidad laboral la Corte Suprema ha accedido a una reparación tan cuantiosa como se pretende en este caso, al efecto veamos como en un evento en donde se acreditó el 20,65% de PCL derivada de lesiones producidas en un accidente de tránsito se ordenó una suma mucho menor a la aquí pretendida:

*“Tasación del daño moral para los padres, hermanas y la victima directa (menor de edad) en quince millones de pesos ( $15.000.000) cada uno, a causa de la perturbación psíquica, deformidad física permanente y perdida de su capacidad laboral en un 20,65%, de estudiante universitaria menor de edad, generadas por la colisión entre vehículo de servicio público y la motocicleta que aquella conducía[[1]](#footnote-1).”*

En este estadio de las cosas es necesario que el Despacho analice que la indemnización como forma de reparar en cierta medida a la víctima no debe tener asomo de arbitrariedad sino que debe obedecer a la evaluación de distintos factores que rodean tanto la ocurrencia del hecho, las condiciones de la propia víctima y la intensidad de las secuelas, recalcando que para el caso que se estudia no se encuentra sustento probatorio que corrobore lo afirmado y lo pretendido frente a este perjuicio en favor de Fabio Leonardo Villarreal gamba.

**b). Oposición al reconocimiento del DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN:** Debe precisarse en el caso particular la víctima directa no ha probado los elementos que tornan procedente esta indemnización, porque no hay prueba de la supuesta afectación en el cambio de las condiciones de vida del señor Fabio Leonardo Villarreal. Por la postura expuesta, es necesario considerar que la parte demandante, pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no es procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de la existencia de lesiones debidamente acreditadas, con secuelas permanentes y pese a ello, en todo caso, el reconocimiento invocado es superior a los casos de similitudes circunstancias de que nos ocupa, que en diferentes postulados la H. Corte Suprema ha reconocido.

En este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, no pueden ni deben ser indemnizados por mi representada el supuesto daño a la vida de relación que alega el demandante, ya que, su presunta causación no se encuentra debidamente probada en ninguna de las modalidades por perjuicio extrapatrimonial, porque no hay prueba suficiente más que su propio dicho, sobre la presunta alteración en las actividades lucrativas, pero no se ha acreditado cuales actividades y la razón objetiva del impedimento de realizarlas. Es acertado indicar entonces que, por lo antes expuesto, resulta abiertamente indebida e injustificada la pretensión de la parte activa de la litis.

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 9:** ME OPONGO por cuanto las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad. No hay lugar a reconocimiento alguno por concepto de daños morales, dado que no existe responsabilidad en cabeza de la parte pasiva dentro del presente asunto. Además, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es exorbitante y en tal sentido, en el improbable e hipotético caso que dicho concepto sea reconocido, no hay lugar al pago de suma alguna que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. En lo que respecta a las pretensiones bajo esta tipología en favor de Sandra María Jiménez Ávila, carece de legitimación en la causa por activa dentro del proceso sin que bore sustento alguno que acredite los motivos que llevan a pretender sumas para esta última. En tal sentido no es procedente reconocer suma alguna para la señora Jiménez y en todo caso su cuantificación es exorbitante. No obstante se deja constancia acerca del contenido del acuerdo transaccional firmado el 23 de diciembre de 2022 y en el cual se estableció tácitamente en su cláusula tercera en donde el entonces reclamante y hoy demandante Fabio Leonardo Villarreal reconoció que no existe otra u toras personas con igual o mejor derecho para reclamar la indemnización que finalmente le fue pagada y que está contenida en la cláusula segunda y tercera del mentado documento y en todo caso en el evento de que aparezca alguien en esas mismas condiciones e igualdad de derechos el citado señor asumirá cualquier perjuicio que se le haya ocasionado a este, exonerando a mi representada de cualquier pago adicional que se relacione con los hechos acaecidos el 4 de octubre de 2022. Es así que de una parte no existe prueba de que la señora Jiménez sea su compañera permanente, y por otro lado declaró el 23 de diciembre de 2022, que no existía persona con igual o mejor derecho, pero en todo caso se comprometió a responder cualquier perjuicio a otra persona que reclame un mejor o igual derecho.

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 10:** ME OPONGO a esta pretensión elevada por la parte Demandante, por cuanto es claro que no procede pago alguno por cuenta de mi representada y en este sentido, por sustracción de materia, también es evidente que no hay lugar a pagar ningún rubro de manera indexada.

**OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN 11:** ME OPONGO a esta pretensión, por cuanto es claro que no procede pago alguno por cuenta de mi representada y en este sentido, es evidente que no hay lugar a pagar ningún rubro por concepto de costas y agencias en derecho. En su lugar, solicito se declare costas y agencias en derecho a cargo de la parte demandante.

**CAPÍTULO III**

**OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO**

El artículo 206 del Código General del Proceso establece que “*quien pretenda el reconocimiento de una indemnización (...) deberá́ estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o su petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos*”. No obstante, en el mismo artículo, el legislador determinó que “*el juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales*”.

Objeto el juramento estimatorio presentado por el Demandante de conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso. Ello partiendo desde las sumas que se reclaman frente al reconocimiento del **daño emergente** por concepto de $715.300atendiendo a la orfandad probatoria que acompaña su estimación y que cuenta con un único recuento de presuntos gastos de traslado del demandante de los cuales no se observa comprobante o factura que permite acreditar primero el pago de dichos traslados y en segunda medida quien debió pagar los mismos.

Ahora bien, respecto al **lucro cesante consolidado**, debe hacerse remembranza sobre los aspectos fundamentales que configuran el lucro cesante. Éste se ha entendido cómo una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufreun daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura. Es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*(…) en cuanto perjuicio****, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. (…) Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente*** *(…)*

*Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que* ***conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables.****”[[2]](#footnote-2)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual.

Ahora bien, el demandante pretende el reconocimiento de $25.861.091 por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, lo que delanteramente debe llevar al despacho a desatender las sumas allí enlistadas, o en su defecto, no podrán tenerse como prueba dentro del proceso, debe decirse que en todo caso es más que claro que no obra sustento alguno en los ingresos presuntamente percibidos, pues del material probatorio adjunto se observa una presunta certificación la cual deberá ser ratificada en las etapas procesales subsiguientes y que carece de valor alguno hasta ahora. Frente a dicho documento es traer al presente escrito que se hace mención acerca de un contrato a término fijo de 3 meses con fecha de inicio del 16 de junio de 2022 hasta el 19 de octubre de 2022, es decir se extendió por 15 días después de la ocurrencia del hecho de tránsito, con lo que son claramente improcedentes los cálculos presuntos por concepto de lucro cesante consolidado que se pretenden y se incluyen como suma juramentada. De lo anterior se desprende una falta total de fundamentos en las sumas que se enuncian, lo que convierte las pretensiones de la demanda en cálculos ajustados al criterio subjetivo del grupo demandante, debiendo ser descartado en su totalidad.

Es claro que las pretensiones encaminadas a obtener un reconocimiento por estos conceptos no están llamadas a prosperar, puesto que no siguen los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual del Lucro Cesante.

En ese sentido, al no existir prueba si quiera sumaria que permita acreditar las sumas solicitadas, las mismas no pueden ser reconocidas dentro de este proceso. En este orden de ideas, es preciso reiterar que la parte Demandante tenía entre sus mandatos toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, cada uno de los daños por los cuales está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, debido a que sobre este particular ha establecido lo siguiente:

*“(...) aun cuando en la acción de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotación de daño emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento,* ***y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipotéticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostración****, como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera reiterada.[[3]](#footnote-3)”* (Subrayado fuera del texto original)

Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que “(...)* ***la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso****; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (...)”[[4]](#footnote-4)*(Subrayado fuera del texto original).

En virtud de lo expuesto, resulta claro que el extremo actor desconoció́ los mandato legales y jurisprudenciales citados, dado que su estimación no obedece a un ejercicio razonado, sino que es meramente especulativo. Razón por la cual, objeto el juramento estimatorio presentado por el extremo actor y solicito que su estimación no sea tenida como prueba de sus supuestos perjuicios.

En conclusión, deberá el despacho desatender los cálculos contenidos en la demanda, atendiendo la falta de objetividad que presentan y la aplicación errónea de fórmulas, basándose en un ingreso fijo mensual carente de pruebas, en un porcentaje de pérdida de capacidad laboral traído del propio dicho del apoderado demandante y finalmente omitiendo los supuestos periodos de tiempo en que la señora Doris Ramírez se encontró incapacitada, lo que a todas luces deja sin fundamento y estructura cualquier emolumento pretendido. Se insiste entonces en que se desatiendan las pretensiones de la demanda en su totalidad.

**CAPÍTULO IV**

**EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA**

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasiones al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

# EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA INEXISTENTE RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

# COSA JUZGADA POR TRANSACCIÓN

Atendiendo a las circunstancias particulares del caso, se advierte que sin perjuicio de las determinaciones que pudieran tener lugar con ocasión a la ausencia de responsabilidad de la parte demandada en la causación del accidente de tránsito del 4 de octubre de 2022. Resulta necesario poner de presente que las personas que integran el extremo pasivo no están llamadas a indemnizar ningún tipo de perjuicio que hubiere podido tener lugar. Toda vez que, entre la Equidad Seguros Generales O.C. y el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba se celebró contrato de transacción en el cual se pactó que el señor Villarreal recibiría como indemnización integral por todos los perjuicios la suma de $3.575.000 y, en consecuencia, el señor Villarreal declaró que Rosmary Pamplona Farfán en calidad de propietaria del vehículo de placas RCU-413 y quien ostenta la calidad de tomadora y asegurada en la póliza Seguro Plus AA000909, la conductora del vehículo asegurado la señora Yuly Paola García Pamplona y la Equidad Seguros Generales O.C., en calidad de compañía aseguradora estaban a paz y salvo y libre de posteriores reclamaciones. Así las cosas, es evidente que con el acuerdo transaccional se produjo efecto de cosa juzgada, lo anterior, por cuanto el acuerdo comprende la misma causa, objeto y partes que se pretenden dilucidar en el presente asunto.

Sea lo primero poner de presente que el artículo 2469 del Código Civil define el contrato de transacción como el acto convencional en virtud del cual, las partes de forma extrajudicial determinan poner fin a sus diferencias, con el propósito de terminar un litigio en curso o de precaver uno futuro, mediante el otorgamiento de concesiones mutuas. Lo cual tiene como efecto eventual, la extinción de las obligaciones de crédito que hubieren podido generarse con ocasión a una eventual sentencia que pusiera fin a la contienda.

A este respecto, se resalta que el 23 de diciembre de 2022, el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba y Equidad Seguros Generales O.C. celebraron acuerdo de transacción mediante el cual se puso fin a las controversias surgidas con ocasión al accidente de tránsito del 4 de octubre de 2022. Lo anterior, tras acordar el pago de la suma de $3.575.000 de pesos en favor del señor Villarreal. En este sentido, declararon a paz y salvo por todo concepto a Rosmary Pamplona Farfán en calidad de propietaria del vehículo de placas RCU-413 y quien ostenta la calidad de tomadora y asegurada en la póliza Seguro Plus AA000909, la conductora del vehículo asegurado la señora Yuly Paola García Pamplona y la Equidad Seguros Generales O.C., en calidad de compañía aseguradora. Con el referido acuerdo, las partes manifestaron voluntariamente el desconocimiento de otras personas o beneficiarios con igual o mejor derecho indemnizatorio con ocasión al accidente de tránsito donde resultó lesionado y en consecuencia, convinieron expresamente que Rosmary Pamplona Farfán, Yuly Paola García Pamplona y la Equidad Seguros Generales O.C. estaban a paz y salvo por todos los perjuicios que se hubieran podido causar con ocasión al accidente de tránsito del 4 de octubre de 2022.

En este sentido, se precisa que la autonomía negocial ha sido definida como la autodeterminación de los intereses propios mediante el ejercicio de los instrumentos negociales previstos en el ordenamiento jurídico con efectos vinculantes. De manera que los sujetos de derecho pueden disponer voluntariamente de sus intereses mediante la creación de derechos y obligaciones en favor de terceros. Conceptualización que puede evidenciarse en el aparte:

*“La autonomía de la voluntad privada es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de cooperación”[[5]](#footnote-5).*

Precisado lo anterior, resulta necesario destacar que el carácter vinculante de los pactos negociales ha sido reconocido como el pilar fundamental de las relaciones negociales entre particulares. Lo anterior, por cuanto el objetivo natural de la creación de obligaciones en favor y a cargo de las partes estriba en su cumplimiento o lo que es lo mismo, las obligaciones se crean para cumplirse, lo cual fundamenta el carácter vinculante de los pactos obligaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario señalar que el artículo 1602 del Código Civil es la disposición que por antonomasia establece la vinculatoriedad de los pactos. De manera que, dada su importancia, se prosigue con la transcripción de su contenido:

*“ARTICULO 1602. LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.*

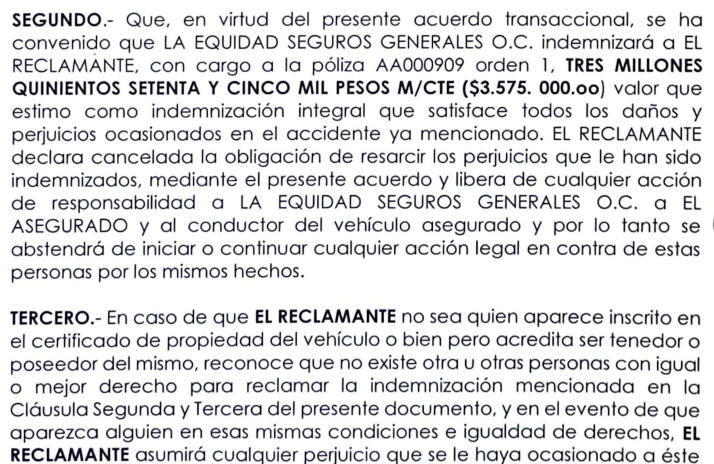
Precisado lo anterior, se pone de presente que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente desarrolló con absoluta claridad el contenido de la disposición referida, en los siguientes términos:

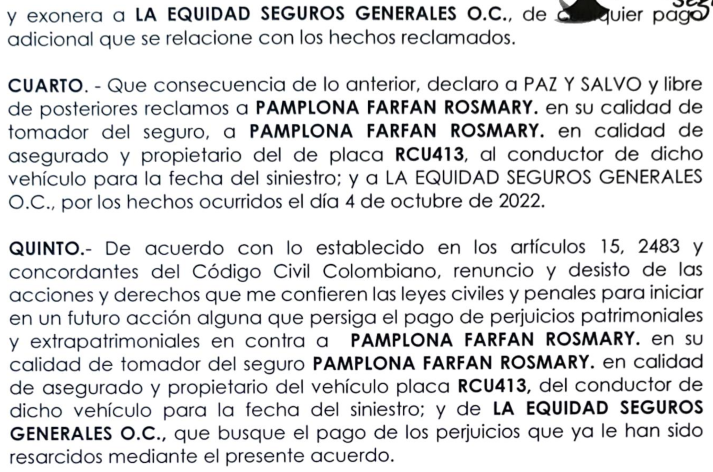
“*El principio jurídico supremo del cual emana todo el derecho de las obligaciones convencionales señala que la finalidad económico–social del contrato lleva implícita el cumplimiento de las estipulaciones en él pactadas.* ***Los contratos se celebran para cumplirse y, por ello, son ley para las partes.***

(…)

*El contenido del contrato sólo puede ser creado, modificado o extinguido por la voluntad de las partes o por la propia ley de modo expreso, sin que sea procedente realizar en tal punto interpretaciones extensivas. Por ello, al juez no le está permitido desconocer el consentimiento de los contratantes dentro de los contornos de la buena fe, como tampoco las causas expresamente previstas en normas positivas para afectar la validez de los convenios o privarlos de sus efectos*”[[6]](#footnote-6).

De lo anterior, resulta claro que las obligaciones contraídas en virtud de los contratos celebrados son ley para las partes contratantes, en tanto estos contemplan obligaciones que se crean para cumplirse. De manera que las convenciones establecidas en ejercicio del principio de autonomía privada son vinculantes. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba estipuló en la cláusulas segunda, tercera, cuarta y quinta del contrato de transacción celebrado con Equidad Seguros Generales O.C. que recibiría de la Equidad Seguros la suma de $3.575.000, valor que estimó como indemnización integral por todos los perjuicios y que en consecuencia declaraba a **PAZ Y SALVO** aRosmary Pamplona Farfán en calidad de propietaria del vehículo de placas RCU-413 y quien ostenta la calidad de tomadora y asegurada en la póliza Seguro Plus AA000909, la conductora del vehículo asegurado la señora Yuly Paola García Pamplona y la Equidad Seguros Generales O.C., en calidad de compañía aseguradora . Pacto que de forma expresa señala:





Así las cosas, resulta claro que el extremo pasivo no está obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio al señor Fabio leonardo Villarreal. Lo anterior, por cuanto el señor Villarreal en ejercicio de la autonomía privada determinó que con la suma de $3.575.000 pesos se indemnizaron de manera integral los perjuicios sufridos por él señor en el accidente del 4 de octubre de 2022.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que con el acuerdo transaccional del 23 de diciembre de 2022 se produjo un efecto de cosa juzgada frente a los perjuicios sufridos por el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba con ocasión al accidente de tránsito del 4 de octubre de 2022. Lo anterior, como quiera que la con la transacción se resolvió un conflicto que tiene la misma causa, las mismas partes y el mismo objeto que se dilucidó en el presente proceso.

En conclusión, en aplicación del principio de autonomía negocial que rige los acuerdos celebrados entre particulares, es dable afirmar que las demandadas y en especial Equidad Seguros Generales O.C. no están llamadas a indemnizar ningún tipo de perjuicio con ocasión al accidente de tránsito del 4 de octubre de 2022. Toda vez que de conformidad con el contenido de las cláusulas segunda, tercera, cuarta y quinta del contrato de transacción suscrito, los hoy demandados están a paz y salvo y libres de cualquier reclamación con relación al accidente de tránsito del 4 de octubre de 2022 y por tanto, no es jurídicamente admisible que el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamba pretenda revivir a través de este proceso un conflicto ya resuelto. De manera que no resulta procedente imponer ningún tipo de condena en contra del extremo pasivo y en favor del demandante con ocasión accidente de tránsito del 4 de octubre de 2022.

# INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LOS DEMANDADOS POR LA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL

En este caso no podrá atribuirse responsabilidad a los Demandados como quiera que no existe prueba cierta que acredite que los daños alegados por la parte demandante ocurrieron como consecuencia de las actuaciones de la conductora del vehículo de placas RCU-413. Pues como ya se indicó, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que pruebe la hipótesis planteada por el Informe Policial de Accidente de Tránsito, la cual en todo caso debe valorarse desde la información consignada en dicho informe, reiterando que el vehículo automotor del cual declara la actora emana la responsabilidad en el hecho, no se encuentra relacionado en el informe topográfico, por lo que nos es posible establecer la dinámica del hecho y la trayectoria de los vehículos en los términos que se describen en la demanda y por esa razón, no podrá confirmarse la existencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados

Vale la pena recordar que la teoría de la causalidad aplicada en Colombia es la causalidad adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia de condiciones en la que simplemente basta aplicar el método de la supresión mental hipotética y determinar si el hecho final se hubiere o no presentado o no con determinada actuación. La teoría de la causa adecuada exige un filtro adicional, en el que de esa multiplicidad de causas que se pueden presentar en el mundo fenomenológico que pueden ser condiciones *sine qua non*, serán relevantes solo aquellas de las que fuera previsible el resultado. Doctrina autorizada y reciente confluye en aseverar que para declarar la responsabilidad es necesaria la concurrencia de tres elementos indispensables, a saber:

*“Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.”[[7]](#footnote-7)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

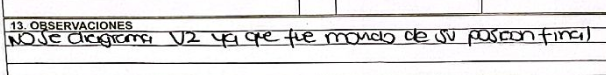
En ese sentido, debe precisarse que una actividad peligrosa es la que puede producir daños incontrolables e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología en las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas de la sociedad del riesgo contemporánea. De ahí, que la obligación de indemnizar en este tipo de responsabilidad no puede depender del control o la previsión de las consecuencias, pues ello supondría imponer un criterio de imputación basado en la previsión de lo imprevisible. Ahora bien, la labor persuasiva debe orientarse a establecer cuál de todos los comportamientos antijurídicos ocasionó el daño. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“(…) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo”[[8]](#footnote-8)*

En efecto, el concepto de peligrosidad de la actividad, empero, no ha sido definido bajo un criterio jurídico general, sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia. Del mismo modo, en este punto es menester aclarar que la responsabilidad civil supone resarcir un daño generado con ocasión de un hecho que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino que opera entre quienes ha vinculado únicamente el azar. En particular, la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, como sucede con la conducción de vehículos automotores, supone (i) que la víctima demuestre el ejercicio de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre ambos; (ii) que el presunto responsable solo podrá exonerarse, salvo norma en contrario, demostrando la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal; y (iii) que en los casos de actividades peligrosas concurrentes el juez deba examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce el daño para establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada actor.

De manera que en la investigación dirigida a establecer si fue destruido el nexo causal o a ponderar el grado de incidencia de la conducta de la víctima, entre los varios antecedentes que en forma hipotética ocasionaron el daño. Únicamente deben dejarse los que, atendiendo los criterios dichos en la jurisprudencia, tuvieron la aptitud para producirlo, más no los que simplemente emergieron como factores meramente circunstanciales. En el caso concreto, es menester señalar que la parte Demandante en el presente asunto no acreditó los elementos para estructurar un juicio de responsabilidad, puesto que en principio no es posible establecer la dinámica del hecho a partir del contenido del informe de tránsito, dentro del cual no se relacionó la posición del vehículo automotor de placas RCU-413 y en todo caso ello impide concluir subjetivamente cual fue la dinámica del hecho tal y como pretende hacerlo la actora. Es así que no existe prueba alguna que acredite relación de causalidad entre el supuesto perjuicio alegado y la actuación de la conductora del vehículo de placas RCU-413. Por ende, la falencia de este requisito indispensable destruye cualquier posibilidad de erigir válidamente un cargo de responsabilidad en contra de los Demandados.

Tal y como se ha indicado en el presente asunto se pretende llevar al convencimiento del despacho a partir de una mera hipótesis del hecho sin que subsistan elementos que corroboren las condiciones de modo, tiempo y lugar que recalca la actora, ello en atención a que el informe policial de accidente de tránsito no incluyó en su informe topográfico la posición final del vehículo de placas RCU-413 y ello en sí mismo impide de cualquier manera acoger las exposiciones de la demanda. Con lo anterior la información relacionada por el agente de tránsito que elaboró el informe, son totalmente subjetivas y carecen de elementos concluyentes que lleven a la declaratoria de responsabilidad en los términos que describe la actora. Basta con revisar el informe de tránsito que obra en el plenario en donde se consignó lo siguiente:



Documento: Informe Policial de Accidente de Tránsito No. AA001515630

Transcripción esencial: “No Se diagrama V2ya que fue movido de su posición final”.

Así las cosas, para que se configure la responsabilidad civil extracontractual es necesario que concurran los siguientes elementos: i) una conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica, ii) un daño o perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo, deterioro, que afecte bienes o intereses ilícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva, iii) una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación y, iv) un factor o criterio de atribución de la responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo (dolo o culpa). Presupuestos que no se reúnen en el presente caso.

Al respecto, vale la pena decir que en el análisis realizado a las pruebas que acompañan la demanda, no se observó en el expediente ninguna que permita demostrar o acreditar la ocurrencia de los hechos aducidos en el escrito de demanda con relación a la responsabilidad de la señora Yuly Paola García Pamplona, conductora del vehículo de placas RCU-413. Es decir, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente de tránsito no se encuentran acreditadas al interior del plenario, puesto que el Informe Policial de Accidente de Tránsito que se aportó a este proceso, se construyó a través de una hipótesis del accidente que determinó el agente de tránsito encargado de realizar el levantamiento del informe sin dejar de lado que dentro del mismo no se graficó en el levantamiento topográfico al vehículo automotor de placas RCU-413, ello en atención a que el vehículo automotor fue movido y por consiguiente no subsisten elementos propios que emanen de dicho informe para que puedan acogerse las pretensiones de la demanda en donde se intenta atribuir responsabilidad a los demandados sin ninguna prueba idónea que demuestre que la hipótesis del accidente efectivamente corresponde a la causa adecuada del mismo, más aún, cuando el patrullero no fue testigo directo del evento.

Así mismo, se resalta que de conformidad con la Resolución 001268 de 2000 expedida por el Ministerio de Transporte, el objetivo de diligenciar los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito es identificar las hipótesis de causas de accidentalidad que permitan elaborar diagnósticos para la planificación de correctivos en materia vial con la finalidad de reducir el número de accidentes y/o disminuir su gravedad. Supuesto que dista considerable de establecer la responsabilidad de los vehículos implicados en los accidentes de tránsito, máxime cuando ni siquiera se dieron las condiciones para que el agente de tránsito pudiera identificar exactamente el lugar de los hechos al haber movido de la posición final los vehículos implicados. Circunstancia que está en consonancia con lo establecido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia según la cual, el valor probatorio del bosquejo topográfico o del Informe de Policial de Accidentes de Tránsito debe ser apreciado de conformidad con el sistema de apreciación racional, mediante el cual el juez no se encuentra atado por reglas preestablecidas que establezcan el mérito atribuible a los diversos medios de prueba. Por el contrario, “*lo dota de libertad para apreciarlos y definir su poder de convicción, con un criterio sistemático, razonado y lógico*”[[9]](#footnote-9). Es decir, el Informe Policial de Accidente de Tránsito no funge como prueba idónea y suficiente para acreditar un nexo causal en este caso, por tratarse de una mera hipótesis no comprobada, máxime cuando el agente de tránsito no pudo siquiera conocer la posición final de los vehículos para poder establecerla. De manera que, al no existir prueba del nexo de causalidad, es jurídicamente improcedente endilgar cualquier tipo de responsabilidad, debiendo en este punto exonerar totalmente a los Demandados.

En conclusión, para configurarse los elementos de la responsabilidad civil es necesario que concurran los siguientes elementos: i) hecho generador, ii) daño y iii) nexo de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación. Sin embargo, verificados los elementos probatorios que obran dentro del expediente no se logra establecer que se reúnan los elementos de la responsabilidad civil dentro del presente asunto, puesto que no existe prueba idónea que acredite un nexo de causalidad entre las conductas de los Demandados y los daños que hoy reclama la parte Demandante. Basta con constatar los elementos documentales que obran en el plenario para establecer que la demandante pretende fundamentar su dicho y en especial las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se produjo el evento, no obstante las hipótesis contenidas en el informe de accidente de tránsito no revisten certeza absoluta atendiendo a que el agente de tránsito que acudió al lugar encontró que ambos vehículos no se encontraban en su posición final y en todo caso el funcionario no presencio el evento, por lo que no subsisten elementos que permitan llevar a la prosperidad de la demanda como erróneamente se pretende. Es así que al no encontrarse acreditado un nexo causal, no podría endilgársele a los Demandados ningún tipo de responsabilidad por no encontrarse acreditado uno de los elementos estructurales de la misma. Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. **ANULACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA COMO CONSECUENCIA DE LA CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS.**

Si bien en el presente caso no se encuentra probada responsabilidad del conductor del vehículo asegurado frente a la ocurrencia del accidente de tránsito como arbitrariamente aduce la parte demandante, en caso de que en el curso del proceso se acredite la existencia de tal circunstancia, de manera subsidiaria y sin que lo aquí expuesto pueda entenderse como un declaración de responsabilidad, el Despacho deberá tomar en consideración que el caso concreto deberá analizarse a la luz del régimen de culpa probada, habida cuenta que corresponde al extremo actor probar el daño y la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, atendiendo a la anulación de la presunción de culpa por la concurrencia de actividades peligrosas. Lo anterior por cuanto ambos conductores desempeñaban una actividad peligrosa, pues previo a la colisión, los dos vehículos se hallaban en marcha.

Siendo así, en la misma línea de la concurrencia de culpas, es de común conocimiento que, cuando se presenta un daño a un tercero en el ejercicio de la conducción de vehículos automotores, la responsabilidad se configura a la luz de las actividades peligrosas. En efecto, ha dicho la jurisprudencia en Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria, MP. William Namén Vargas, del 24 de agosto de 2009 lo siguiente:

*“explicó la sala, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto, establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal”*[[10]](#footnote-10)*.*

Es decir que, el Juez debe analizar la conducta de todos los intervinientes, víctimas o no, para así verificar si su comportamiento tiene incidencia en la ocurrencia de los hechos. Así mismo la Corte sostuvo que *“No es que las actividades peligrosas encarnen de suyo la “culpa”*. El ejercicio de una actividad de esta naturaleza podrá desplegarse, aún con todo el cuidado o diligencia exigible y también sin ésta.

Empero, no escapa a la Corte la posibilidad de una conducta culposa o dolosa del autor, de la víctima o de uno y otro en el ejercicio de una actividad peligrosa; así en los daños generados con la colisión de vehículos, uno de los conductores podrá infringir las normas de tránsito, omitir las revisiones obligatorias, desplazarse a alta velocidad, en zona prohibida, atropellar deliberadamente un peatón o al otro automotor, entre otros, y, el otro, incurrir en similares comportamientos. En tales hipótesis, esas conductas apreciadas en su exacto sentido encarnan la exposición o elevación de los riesgos o peligros del ejercicio de la actividad peligrosa, los deberes de precaución o los inherentes a la posición de garante, según la perspectiva que se acoja, más no desplazan la responsabilidad al régimen general de la culpa, desde que está ninguna relevancia ostenta para estructurarla ni excluirla. La conducta, sea o no culposa o dolosa, se apreciará objetivamente en el contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y la secuencia causal del daño según el marco fáctico de circunstancias y los elementos probatorios, para determinar si es causa única o concurrente y, por ende, excluir o atenuar el deber indemnizatorio. No es que se valore la culpa o el dolo en cuanto tales, ni en consideración al factor subjetivo, sino la conducta en sí misma dentro del contexto del ejercicio de una actividad peligrosa según el marco de circunstancias fácticas y los elementos probatorios.

Así las cosas, el régimen aplicable en tratándose de actividades peligrosas, no enmarca siempre una acción maliciosa y voluntaria, por el contrario, pueden ocurrir fruto de coincidencias o algún tipo de contingencia que suelen pasar con frecuencia, por tanto no es procedente imputar responsabilidad por el simple hecho de ejercer una actividad peligrosa, sino que debe hacerse un análisis exhaustivo de los elementos que pueden tener algún tipo de inferencia en la ocurrencia, así mismo sostiene la Honorable Corte Suprema de Justicia que *“La supuesta presunción de culpa por el mero ejercicio de una actividad peligrosa, carece de todo fundamento lógico y normativo. Legal, porque ninguna parte del artículo 2356 del Código Civil, siquiera menciona presunción alguna. Lógico, porque cualquier actividad humana, y en especial, la peligrosa, puede desplegarse con absoluta diligencia o cuidado, o sea, sin culpa y también incurriéndose en ésta. De suyo, tal presunción contradice elementales pautas de experiencia y sentido común, al no ajustarse a la razón presumir una culpa con el simple ejercicio de una actividad que de ordinario como impone la razón se desarrolla con diligencia, prudencia y cuidado”*.

La doctrina ha sido clara en establecer que la colisión de actividades peligrosas se presenta cuando el daño es el resultado de la conjunción de dos culpas presuntas, es decir, que se haya producido en el ejercicio por parte de ambos adversarios de actividades, o provengan de cosas, de las cuales la jurisprudencia desprenda presunciones de culpa o con la intervención de varias personas sujetas a la dependencia de otras.

Así las cosas, en el presente caso nos encontraríamos frente a la responsabilidad con culpa probada prevista en el artículo 2341 del Código Civil, tal como lo ha establecido la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los fallos, cuyos apartes cito a continuación:

*“La parte demandante debió probar la culpa de los demandados, por tratarse de una colisión entre dos vehículos bus y tractocamión que transitaban bajo la presunción de actividades peligrosas, para el caso la presunción de culpa se neutraliza y lo aplicable no sería el artículo 2356 del Código Civil sino el 2341 de culpa probada.”*[[11]](#footnote-11)

*“Como en este caso el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban actividades de ese tipo, se eliminaba cualquier presunción de culpa, lo que a su turno implicaba que la acción no se examinara a la luz del artículo 2356 del C. Civil, sino del 2341 del ibidem, evento en el cual el demandante corría con la carga de demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual.”*[[12]](#footnote-12)

*“[…] actividad desplegada por las partes de las denominadas peligrosas, razón por la cual las presunciones sobre su culpa se neutralizan. Por ello, habrá que responsabilizar a quien se le demuestre una culpa efectiva.*

*(…)*

*La presunción de culpa, ninguna utilidad normativa o probatoria comporta al damnificado, tampoco es regla de equidad y menos de justicia, pues su único efecto jurídico es eximir de la probanza de un supuesto fáctico por completo ajeno al precepto, no menester para estructurar la responsabilidad, ni cuya probanza contraria es admisible, cuando toda presunción, salvo la iuris et de iuris que exige texto legal expreso, es susceptible de infirmar con la demostración de la diligencia y cuidado. Por tanto el juzgador con sujeción a la libre convicción y la sana crítica valorará los elementos probatorios para determinar cuál de las actividades peligrosas concurrentes es la causa del daño y la incidencia de la conducta de la víctima en la secuencia causal, asignando, en todo o en parte, a uno o a ambos sujetos la responsabilidad según su participación, a cuyo efecto, imputado a la actividad de una sola parte, ésta es responsable por completo de su reparación y si lo fuere a ambas, cada una lo será en la medida de su contribución. En otros términos, cuando la actividad peligrosa del agente es causa exclusiva del daño, éste será responsable en su integridad; contrario sensu, siéndolo la ejercida por la víctima, ninguna responsabilidad tendrá; y, si aconteciere por ambas actividades, la del agente y la de la víctima, como concausa, según su participación o contribución en la secuencia causal del daño, se establecerá el grado de responsabilidad que le asiste y habrá lugar a la dosificación o reducción del quantum indemnizatorio”*[[13]](#footnote-13)

Entonces para fundamentar un proceso de responsabilidad civil, no basta con solicitar una imputación objetiva entre el resultado y el acto causal, se requiere que el acto sea negligente o imprudente, y lo será aquél que infringe el deber de cuidado objetivamente exigible en la relación de la actividad peligrosa, para el caso, este deber de cuidado viene determinado por reglas especiales de tránsito y circulación de vehículos automotores.

En conclusión, tal como se desprende de la narración de los hechos de la demanda, tanto el actor como la conductora del vehículo de placas RCU-413 estaban en el ejercicio de una actividad peligrosa, consistente en la conducción de un vehículo automotor, por lo tanto, concurren al suceso dañoso ejerciendo similares actividades peligrosas y en tal supuesto, se aniquilan mutuamente, forzando al actor a demostrar la culpa del conductor del vehículo asegurado.

Por lo que respetuosamente solicito al despacho tener probada esta excepción.

1. **REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA VÍCTIMA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO.**

En gracia de discusión y de manera subsidiaria, debe tenerse en cuenta que en el improbable y remoto evento en que se demuestre que sí existió un hecho generador imputable a la conductora del vehículo de placas RCU-413. Ante esta hipotética circunstancia, de todas maneras, debe aplicarse la respectiva reducción de la indemnización. Lo anterior, en proporción a la contribución que tuvo en el accidente la propia víctima, por lo menos en un 50%. Por supuesto, sin perjuicio de que como ya se demostró en la anterior excepción, no hay prueba del nexo de causalidad entre el actuar de los demandados y el daño.

Todo lo anterior por la compensación de culpas según el precepto contenido en el artículo 2357 del Código Civil, en el que se indica que la reducción de una indemnización se debe por la participación de la víctima. Es decir, si el que ha sufrido el daño se expuso a él imprudentemente. Lo que claramente aconteció en este caso, puesto que no está demostrado que las consecuencias del accidente provengan de los demandados. Conforme a lo dicho, el Despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia de la víctima en la ocurrencia del daño. Lo anterior, con el propósito de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución al daño que sufrió. Así es como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 19 de noviembre de 1993:

*“para aquellos eventos en los que tanto el autor de la conducta dañosa como el damnificado concurran en la generación del perjuicio, el artículo 2357 del Código Civil consagra una regla precisa, según la cual* ***‘[l]a apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente’****. Tradicionalmente, en nuestro medio se le ha dado al mencionado efecto la denominación ‘compensación de culpas”[[14]](#footnote-14)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En distinto pronunciamiento, la misma corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del 40% de los perjuicios:

*“En cuanto a la conducta de la víctima, analizada desde lo culpabilístico, es concurrente del hecho dañoso, por infringir los artículos 77 y 79 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), al aparcar en lugar prohibido y sin encender las luces de parqueo. Empero, la violación de tales normas viales no resultan incidentes en un 50% de la causa del accidente, pues amén de su transgresión, el otro maquinista lo vio a cierta distancia estacionado, sólo que éste fue negligente, pues al no disminuir la velocidad ni cambiar de calzada, chocó con él.*

*Sin embargo,* ***aunque el obrar de Carlos Alirio Méndez Lache no fue determinante en una mitad en la producción del resultado dañoso, su actuar, aunque pasivo por no desarrollar al momento de la colisión la actividad peligrosa de la conducción, fue causante como mínimo del mismo, porque al detenerse sobre la carretera, asumió́ un riesgo razonablemente previsible, propio de las incidencias de la circulación, como lo es el de resultar impactado, ya sea por la actividad de otro conductor.***

*Debió́ entonces tomar “precauciones” a fin de evitar el siniestro, como haber parqueado en una berma, o en un lugar permitido para ello, evitando, en todo caso, convertirse en un obstáculo directo para vehículos en marcha en un segmento de la vía que les permite alcanzar altas velocidades.*

*Así las cosas, la mencionada negligencia y situación de riesgo provocada por el demandante, conducen a esta Corte, en atención a los elementos concausales y culpabilísticos, a modificar su porcentaje de concurrencia en un 40%.”[[15]](#footnote-15)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De tal suerte que queda completamente claro que el fallador debe considerar el marco de circunstancia en que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima en la ocurrencia del daño por el cual solicita indemnización.

En conclusión, tal como lo ha determinado la jurisprudencia, en caso de probarse que el señor Fabio Leonardo Villarreal tuvo incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del accidente de tránsito acaecido el 4 de octubre de 2022, deberá declararse que el porcentaje de la causación del daño a lo sumo es del 50%. Razón por la cual, de considerarse procedente una indemnización por los perjuicios deprecados, esta debe ser reducida conforme al porcentaje de participación de la víctima en la ocurrencia del accidente, como mínimo en un 50%. Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. **IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE**

Debe considerar el despacho que las sumas pretendidas por el demandante no gozan de sustento para el caso. Al revisar los documentos aportados con la demanda se encuentra una tabla con una presunta relación de gastos por valor de $715.300 entre los cuales se describen viajes en taxi y servicios de transporte en plataformas ilegales, los cuales en todo caso son meramente enunciativos y no se acompañan de ninguna clase de soporte, razón por la cual no podrá tener vocación de prosperidad lo reclamado ante una pretensión carente de sustento.

El daño emergente ha sido desarrollado jurisprudencialmente como la tipología de perjuicios que comprende la pérdida de elementos patrimoniales como consecuencia de los hechos dañosos. Sin embargo, ha establecido ampliamente que para la procedencia del reconocimiento de los mismos es totalmente necesario acreditarlos dentro del proceso, carga que le asiste al reclamante de los perjuicios. Bajo estos derroteros, en el caso particular es completamente improcedente reconocimiento alguno a título de daño emergente, por cuanto no existe prueba cierta, clara y suficiente que acredite las sumas solicitadas por el extremo actor, pues se aportan una serie de documentos que no tienen fecha ni tampoco permiten determinar que en efecto fue el señor Luis Alberto Orjuela quien pagó esas sumas de dinero.

Es claro que la parte Demandante tenía entre sus mandatos como parte actora, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, la cuantía de los daños por los cuales se está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. A efectos de entender la tipología de dichos perjuicios, vale la pena rememorar lo indicado por la honorable Corte Suprema de Justicia con respecto a la definición del daño emergente en los siguientes términos:

*“De manera, que el daño emergente comprende la pérdida misma de elementos patrimoniales, las erogaciones que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad.*

*Dicho en forma breve y precisa, el daño emergente empobrece y disminuye el patrimonio, pues se trata de la sustracción de un valor que ya existía en el patrimonio del damnificado; en cambio, el lucro cesante tiende a aumentarlo, corresponde a nuevas utilidades que la víctima presumiblemente hubiera conseguido de no haber sucedido el hecho ilícito o el incumplimiento.”[[16]](#footnote-16)*

Con fundamento de lo anterior, podemos concluir que el daño emergente comprende la pérdida de elementos patrimoniales, causada por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad. Ahora bien, la parte Demandante manifiesta que con ocasión al accidente de tránsito el 4 de octubre de 2022 se causaron gastos por valor de $715.300. Sin embargo, no obran en el expediente elementos demostrativos que permitan determinar efectivamente la causación de dicho perjuicio o que prueben siquiera sumariamente la existencia del daño emergente en las sumas que alegan. Por el contrario, lo que se evidencia es que el extremo actor fundamenta su petición en una mera aseveración sin fundamento probatorio alguno discriminando multiples conceptos contenidos en una tabla sin allegar facturas o comprobantes que permitan determinar que en efecto el demandante pagó esas sumas de dinero.

En este orden de ideas, es fundamental que el Despacho tome en consideración que en el plenario no obran pruebas idóneas y conducentes que permitan acreditar un daño emergente como consecuencia del accidente de tránsito del 4 de octubre de 2022. Como quiera que para probar este perjuicio fueron aportadas documentales que no dan cuenta de la fecha ni de la persona que efectuó un presunto pago, además los documentos aportados no permiten determinar que efectivamente esos rubros corresponden a una pérdida patrimonial que haya sufrido el extremo actor con ocasión al accidente. De manera que no se debe perder de vista que la carga de la prueba de acreditar los supuestos perjuicios reside única y exclusivamente en cabeza de la parte Demandante. En este sentido, si dicha parte no cumple con su carga y en tal virtud, no acredita debida y suficientemente sus aparentes daños, es jurídicamente improcedente reconocer cualquier suma por dicho concepto. Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia al establecer:

*“(…) aun cuando en la acción de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotación de daño emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento,* ***y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipotéticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostración,*** *como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera reiterada.”[[17]](#footnote-17) (Subrayado fuera del texto original)*

En ese orden de ideas, es claro que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que, para la procedencia de reconocimiento de perjuicios a título de daño emergente, es necesario que el reclamante demuestre mediante prueba suficiente que se trata de perjuicios ciertos y no hipotéticos. Lo que no sucede en el caso en concreto, en tanto que la parte Demandante solicita reconocimiento de $715.300 a título de daño emergente, sin que pruebe la causación de dichos perjuicios. Carga que le asiste por ser el reclamante del daño, según los términos jurisprudenciales de la Corte. Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que “(…)* ***la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso****; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (…)”[[18]](#footnote-18)* (Subrayado fuera del texto original)

Así las cosas, en relación a la carga probatoria que recae en este caso en la parte Demandante, se puede observar que en el expediente no obra prueba alguna que acredite las erogaciones estimadas en $715.300 con ocasión al accidente de tránsito del 4 de octubre de 2022. En efecto, la consecuencia jurídica a la falta al deber probatorio en cabeza del Demandante es sin lugar a dudas la negación de la pretensión. En otras palabras, no puede presumirse el daño emergente alegado por la parte actora sin que su dicho sea sustentado mediante prueba o elemento de juicio suficiente para acreditar la cuantía de la pérdida que alega. Es claro que jurisprudencialmente se ha establecido que en tanto no se demuestre mediante prueba la causación del daño emergente, es jurídicamente improcedente considerar reconocer algún emolumento por este concepto. De modo que no le queda otro camino al Despacho que desestimar las pretensiones de la Demandante en lo relacionado con el daño emergente, puesto que no cumplió con la carga de probarlo.

En conclusión, una vez revisadas las pruebas obrantes en el plenario del proceso, no cabe duda que no existe ninguna que acredite la causación de daño emergente. Razón suficiente para que no se le reconozca ninguna suma indemnizatoria por esta tipología de perjuicios, en tanto que no se encuentra probada. Máxime, cuando la Corte Suprema de Justicia fue totalmente clara en indicar que éstos no se presumen, sino que se deben probar. Razón suficiente para solicitar al Despacho que desestime la pretensión invocada por la Demandante en lo relacionado con el daño emergente.

# INEXISTENCIA Y FALTA DE PRUEBA DEL LUCRO CESANTE

Al revisar los archivos que acompañan la demanda, brilla por su ausencia cualquier clase de documento a partir del cual se pueda certificar el presunto ingreso a partir del cual se fundamenta el cálculo total del lucro cesante consolidado. Es así que se desconoce totalmente de donde emana la renta base de liquidación por la suma de $7.000.000 que se cita en la demanda y frente a la cual vagamente se hace una enunciación en el acápite de hechos afirmándose que el señor Fabio Leonardo Villarreal se encontraba vinculado laboralmente a una empresa bajo el cargo de Gerente de Mercadeo, para lo cual se aporta una presunta certificación la cual deberá ser ratificada en las etapas procesales subsiguientes y que carece de valor alguno hasta ahora. Frente a dicho documento es traer al presente escrito que se hace mención acerca de un contrato a término fijo de 3 meses con fecha de inicio del 16 de junio de 2022 hasta el 19 de octubre de 2022, es decir se extendió por 15 días después de la ocurrencia del hecho de tránsito, con lo que son claramente improcedentes los cálculos presuntos por concepto de lucro cesante consolidado que se pretenden y se incluyen como suma juramentada. Es claro entonces que, el cálculo referenciado por la parte demandante y del cual emana su pretensión por concepto de lucro cesante, no es más que un cálculo hipotético y distante de la realidad, sin fundamento y con claras estimaciones desbordadas, por lo que deberá el despacho desatender en su totalidad las sumas reclamadas y que ascienden a $25.861.091 ante la orfandad probatoria que sustente dicho rubro.

Para empezar, debe hacerse remembranza sobre los aspectos fundamentales que configuran el lucro cesante. Éste se ha entendido cómo una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufreun daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura. Es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*(…) en cuanto perjuicio****, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. (…) Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente*** *(…)*

*Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que* ***conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables.****”[[19]](#footnote-19)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual.

Ahora bien, se debe mencionar que la parte demandante fundamenta lo pretendido a título de lucro cesante afirmando que Fabio Leonardo Villarreal percibía la suma mensual fija de $7.000.000, todo esto al afirmarse que estaba vinculado laboralmente a una empresa bajo el cargo de Gerente de Mercadeo, para lo cual se aporta una presunta certificación la cual deberá ser ratificada en las etapas procesales subsiguientes y que carece de valor alguno hasta ahora. Frente a dicho documento es traer al presente escrito que se hace mención acerca de un contrato a término fijo de 3 meses con fecha de inicio del 16 de junio de 2022 hasta el 19 de octubre de 2022, es decir se extendió por 15 días después de la ocurrencia del hecho de tránsito, con lo que son claramente improcedentes los cálculos presuntos por concepto de lucro cesante consolidado que se pretenden y se incluyen como suma juramentada. De allí que las sumas relacionadas por el demandante partan de premisas hipotéticas sin fundamento y que claramente carecen de valor. De modo qué siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. Máxime, cuando en este proceso no se encuentra demostrado el supuesto ingreso económico que era percibido por Fabio Leonardo Villarreal. En tal virtud, ante la ausencia de prueba del lucro, claramente deberá denegarse totalmente esta pretensión incluida en la demanda.

En igual sentido se pone de presente al despacho la forma en cómo se propuso el cálculo de las sumas que se pretenden en la demanda. Tal y como puede verificarse en el escrito de la demanda, la liquidación del lucro cesante es ajena a las fórmulas establecidas para ello, pues encontramos una liquidación atendiendo a 105 días en los cuales presuntamente se encontró incapacitado el señor Villarreal Gamboa y de los cuales se aportan piezas documentales que igualmente deberán valorarse en la oportunidad procesal oportuna, sin poner de presente que la presunta vinculación laboral del mentado señor Villarreal concluyo 15 días después de la ocurrencia del hecho, atendiendo a que se encontraba desempeñando un contrato a término fijo de tres meses. Con todo lo indicado nos encontramos entonces ante una estimación carente de prueba que se fundamentó a partir de criterios subjetivos y que carece de toda credibilidad para este asunto.

En conclusión, es claro que las pretensiones encaminadas a obtener un reconocimiento por estos conceptos no están llamadas a prosperar, puesto que no siguen los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual del Lucro Cesante, recalcando que no obra prueba alguna dentro del expediente procesal que permita evidenciar el supuesto ingreso fijo mensual percibido por el señor Fabio Leonardo Villarreal como vendedora informal, con lo que, tales sumas, por su carácter hipotético y distante de cualquier medio probatorio, no podrán valorarse dentro del análisis del despacho y deberán descartarse en su totalidad.

Por todo lo anterior, solicito señor juez tener por probada esta excepción.

#### IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIO POR HECHO DAÑOSO

En el presente caso no sólo es jurídicamente inadmisible predicar responsabilidad alguna en cabeza de los demandados por concepto de perjuicio por hecho dañoso. Sino que, además, tampoco es jurídicamente viable imponer condena alguna tendiente al pago por concepto de esta tipología de perjuicio, toda vez que el mismo en la jurisdicción ordinaria especialidad civil no constituye un daño resarcible. Adicionalmente de las descripciones que se hacen frente a este presunto perjuicio se observa que las mismas se estructuran bajo el cálculo del tiempo de duración del presunto tratamiento médico para la recuperación que ha realizado el demandante, circunstancia que da pie a considerar que se incluye una nueva pretensión a título de lucro cesante, el cual ya ha sido tratado en el acápite anterior y en todo caso no goza de sustento para su reconocimiento.

De lo anterior, resulta claro que el reconocimiento de perjuicio por hecho dañoso no es un perjuicio reconocido por la Corte Suprema de Justicia en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil y por tanto, **NO** es un perjuicio susceptible de ser valorado en esta jurisdicción, deberá el Despacho desconocer esta pretensión por cuanto esta categoría de perjuicio no es indemnizable en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil y mucho menos se ha contemplado por la jurisprudencia en otros ámbitos.

En conclusión, sin perjuicio de que en el asunto que nos ocupa no existe responsabilidad imputable al extremo pasivo de la litis, deberá tomar en consideración el Despacho que, el reconocimiento de perjuicio por hecho dañoso es un perjuicio jurídicamente inviable, toda vez que el mismo en la jurisdicción ordinaria especialidad civil, así como en otras jurisdicciones no constituye un daño resarcible. Es en razón de ello que no podrá imponerse condena alguna por este concepto el cual en todo caso contempla una suma exorbitante e injustificada de $82.849.892.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

# TASACIÓN EXORBITANTE DEL DAÑO MORAL

Debe ponerse de presente que, al margen de la inexistente responsabilidad a cargo de la parte demandada, de todas maneras, la solicitud de perjuicios morales resulta a todas luces improcedente, la Corte Suprema de Justicia a través de sus múltiples pronunciamientos ha dejado decantados los límites máximos de reconocimiento de perjuicios, como lo es en el caso del daño moral. En tal sentido, es importante señalar que los perjuicios morales solicitados por la parte Demandante resultan equivocados y exorbitantes.

Así pues, las sumas reclamas, no pueden acogerse por el despacho ya que ni siquiera en eventos de alta gravedad como la muerte o en eventos de lesiones que comportan secuelas como daño neuronal irreversible y dependencia de la víctima, la Corte Suprema de Justicia ha accedido a una indemnización como la aquí pretendida. Es decir que en este caso la pretensión es abiertamente exorbitante y desconoce los baremos indemnizatorios que sobre la materia ha fijado el alto Tribunal. Es decir que en este caso la pretensión es abiertamente exorbitante y desconoce los baremos indemnizatorios que sobre la materia ha fijado el alto Tribunal.

En este punto es importante mencionar que la Corte Suprema de Justicia a través de sus múltiples pronunciamientos, ha dejado decantados los límites máximos de reconocimiento de perjuicios, como lo es en el caso del daño moral. En tal sentido, es importante señalar que los perjuicios morales solicitados por la parte Demandante resultan equivocados y exorbitantes. Puesto que siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para la tasación de los perjuicios morales en eventos de lesiones se ha reconocido la suma de 40 millones de pesos para la víctima directa y para los familiares en primer grado de consanguinidad y afinidad, tal y como se muestra a continuación:

*“La tasación de este tipo de perjuicio extrapatrimonial se encuentra confiada al arbitrio del juzgador, que debe determinar en cada caso “las condiciones personales de la víctima, apreciadas según los usos sociales, la intensidad de la lesión, la duración del perjuicio, entre otras situaciones que el juez logre advertir para la determinación equitativa del monto del resarcimiento”.*

*La Corte encuentra acreditado el perjuicio por daño a la vida en relación de Nelcy Chala Leiva-de relativa juventud, pues al momento del accidente solo tenía 46 años de edad-, quien ha tenido que sobrellevar y padecer las marcas que el accidente dejó en su rostro, afectando su apariencia estérica y su autoestima, lo que tuvo que haber incidido negativamente en sus relaciones sociales y familiares.*

*Por tal factor, se reconocerá la suma de $40.000.000 para la victima directa del accidente[[20]](#footnote-20).”*

De acuerdo con lo anterior se evidencia que en el caso de lesiones que producen algún tipo de cicatriz incluso visible, el baremo indemnizatorio fue de 40 millones de pesos. Ahora bien, debe señalarse que ni siquiera en el evento de lesiones en donde se presentan secuelas que comportan una pérdida de capacidad laboral la Corte Suprema ha accedido a una reparación tan cuantiosa como se pretende en este caso, al efecto veamos como en un evento en donde se acreditó el 20,65% de PCL derivada de lesiones producidas en un accidente de tránsito se ordenó una suma mucho menor a la aquí pretendida:

*“Tasación del daño moral para los padres, hermanas y la victima directa (menor de edad) en quince millones de pesos ( $15.000.000) cada uno, a causa de la perturbación psíquica, deformidad física permanente y perdida de su capacidad laboral en un 20,65%, de estudiante universitaria menor de edad, generadas por la colisión entre vehículo de servicio público y la motocicleta que aquella conducía[[21]](#footnote-21).”*

En este estadio de las cosas es necesario que el Despacho analice que la indemnización como forma de reparar en cierta medida a la víctima no debe tener asomo de arbitrariedad, sino que debe obedecer a la evaluación de distintos factores que rodean tanto la ocurrencia del hecho, las condiciones de la propia víctima y la intensidad de las secuelas. Frente a ello es pertinente recordar los elementos que la Corte Suprema ha precisado para tal fin:

*“La tasación de este tipo de perjuicios extrapatrimonial [refiriéndose al daño moral] se encuentra confiada al arbitrio del juzgador, que debe determinar en cada caso “****las condiciones personales de la víctima, apreciadas según los usos sociales, la intensidad de la lesión, la duración del perjuicio,*** *entre otras situaciones que el juez logre advertir para la determinación equitativa del monto del resarcimiento[[22]](#footnote-22)”. (énfasis y corchetes añadidos)*

Por lo anterior emerge con claridad que no puede considerarse antojadizo el rubro indemnizatorio toda vez que de manera clara debe valorarse cuales son las repercusiones que para la víctima y demás reclamantes comportó el presunto hecho lesivo, la temporalidad de la lesión, la temporalidad de las secuelas, la afectación emocional en desarrollo de sus actividades diarias y no puede de ninguna manera rebasar los límites indemnizatorios que a través de la jurisprudencia se han establecido, pues recuérdese que la intención de tal indemnización nunca podrá ser enriquecer a la víctima. Frente a este tópico se hace necesario indicar como la Corte Suprema ha recordado la intención meramente indemnizatoria que reviste cualquier orden de pago bajo este perjuicio reclamado, veamos:

*La valoración del daño moral subjetivo, por su carácter inmaterial o extra patrimonial, se ha confiado al discreto arbitrio de los falladores judiciales.* ***Esto, por sí, lejos de autorizar interpretaciones antojadizas, les impone el deber de actuar con prudencia, valiéndose de los elementos de convicción que obren en el plenario y atendiendo la naturaleza del derecho afectado y la magnitud del daño.***

*Esta clase de daño, se ha dicho, "incide en la órbita de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos, pues consiste en el pesar, en la aflicción que padece la víctima por el comportamiento doloso o culposo de otro sujeto, por cuanto sus efectos solamente se producen en la entraña o en el alma de quien lo padece, al margen de los resultados que puedan generarse en su mundo exterior, pues en éstos consistirían los perjuicios morales objetivados*[[23]](#footnote-23)*” (subrayado y negrilla fuera del texto original)*

*(…)*

***“La reparación debe procurar una relativa satisfacción para no dejar incólume o impune la agresión; sin que represente una fuente de lucro injustificado que acabe desvirtuando la función asignada por la ley****. Es posible establecer su quantum, sostuvo recientemente la Sala, «en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador*[[24]](#footnote-24)*.*

*Al juez, por tanto, le corresponde fijar el perjuicio extrapatrimonial,* ***pero las bases de su razonamiento no deben ser arbitrarias.*** *Se trata, sostuvo la Sala, «de una deducción cuya fuerza demostrativa entronca con clarísimas reglas o máximas de la experiencia de carácter antropológico y sociológico, reglas que permiten dar por sentado el afecto que los seres humanos, cualquiera sea su raza y condición social, experimentan por su padres, hijos, hermanos o cónyuge*[[25]](#footnote-25)*”*

Así las cosas, con suficiencia se aprecia que la jurisprudencia ha sido clara no solo en establecer que debe atenderse la entidad del perjuicio sino en establecer las características que el juzgador debe valorar para que su decisión no se torne antojadiza, sino que por el contrario obedezca a procurar la indemnización en estricta atención a la aflicción ocasionada y no más allá de ella. Por tanto, corresponderá al *arbitrio iudicis* determinar el valor del daño moral, teniendo en cuenta los elementos probatorios que reposan en el expediente. Por lo que es claro que la suma solicitada resulta claramente exorbitante en atención a los baremos indemnizatorios fijados en la jurisprudencia.

En conclusión, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte Demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada, poniendo de presente que no obra prueba alguna de presuntas lesiones de carácter permanente y mucho menos un dictamen de pérdida de capacidad laboral que lo sustente y aunque así fuera, la jurisprudencia ha reconocido montos de máximo $15.000.000 en los eventos de PCL (debidamente probada) aproximada del 20%. En tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, la suma solicitada de $25.000.000 para el señor Fabio Leonardo Villarreal y $20.000.000 para su presunta compañera permanente resulta exorbitante y se encuentra por fuera de los lineamientos establecidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

# IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN

Es menester resaltar que es jurídicamente improcedente condenar al extremo pasivo de este proceso al pago de suma alguna a título de daño a la vida de relación, toda vez que este concepto no tiene ninguna viabilidad jurídica, pues no obra en el plenario una prueba que sustente su pretensión, ni siquiera un dictamen de pérdida de capacidad laboral que corrobore las presuntas disminuciones del señor Villarreal. No obstante, en este caso el señor Villarreal ya fue indemnizado de manera integral y por concepto de todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales como consecuencia del hecho de tránsito y resarcir ningún perjuicio.

En primer lugar, debe resaltarse que el daño a la vida en relación es una tipología de perjuicio que busca justamente indemnizar a la víctima directa por la privación de poder realizar aquellas actividades que hacen agradable su existencia. Pero además en los eventos en que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido este emolumento se requiere una alta carga probatoria que la parte demandante no ha cumplido, en la medida en que no se evidencia acreditación alguna de un cambio en las condiciones de vida, la imposición de cargas desproporcionadas o el cambio del proyecto de vida de aquellas con ocasión al hecho lesivo, por ende, no se satisfacen los elementos de procedencia por lo que el despacho no podrá acceder a tal pedimento.

Lo anterior, ha sido reafirmado por la Corte Suprema de Justicia al indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psíquica o física que el impide o dificulta gozar de actividades rutinarias que disfrutaba antes del hecho lesivo. No obstante, el daño a la vida en relación sólo se le debe reconocer a la víctima directa. En otras palabras, el daño a la vida en relación sólo se debe reconocer a quien sufrió una alteración física o psíquica por el accidente, esto es, a la víctima directa. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia precisó:

“*(…) b) Daño a la vida de relación:*

***Este rubro se concede únicamente a la víctima directa*** *del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud,* ***que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales*** *(…)*”*21* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).[[26]](#footnote-26)

Así las cosas, se observa que en el caso particular la víctima directa no ha probado los elementos que tornan procedente esta indemnización, porque no hay prueba de la supuesta afectación en el cambio de las condiciones de vida del señor Fabio Leonardo Villarreal.

Por la postura expuesta, es necesario considerar que la parte demandante, pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no es procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de la existencia de lesiones debidamente acreditadas, con secuelas permanentes y pese a ello, en todo caso, el reconocimiento invocado es superior a los casos de similitudes circunstancias de que nos ocupa, que en diferentes postulados la H. Corte Suprema ha reconocido.

En la actualidad, como es bien sabido, el daño a la vida de relación pretende reparar el mismo perjuicio sufrido en la órbita física y psicológica de la víctima, que le impide realizar aquellas actividades agradables a la existencia, sin que este tipo de perjuicio tenga por vocación reconocerse en todos los casos. En efecto, pues hoy el mismo se ha admitido excepcionalmente cuando se trata de lesiones graves, que afecten la órbita de desenvolvimiento del lesionado y sólo para ser indemnizado a la víctima directa, por estar asociado estrictamente con lesiones físicas o anatómicas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha delimitado el concepto de daño a la vida de relación y lo diferencia del daño moral, así:

*“(…) Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o menor grado a causa de una lesión inflingida (sic) a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial”.*

*Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, a paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar (…)”[[27]](#footnote-27)*

Para conocer a mayor profundidad lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en algunos casos en los que excepcionalmente se reconoció este concepto indemnizatorio, es preciso señalar que la Sala Civil de esta alta corporación ordenó el pago de $ 30.000.000 a la víctima directa por los perjuicios ocasionados por la extracción de su ojo izquierdo. Obsérvese que, en aquel evento, la víctima sufrió graves secuelas para toda la vida y que afectaron directamente su interacción con el mundo exterior. Las secuelas fueron de tal magnitud, que era de esperarse que su actitud y su forma de ser cambiaran abruptamente tras los hechos que motivaron la demanda.

En el caso particular que nos cita al presente proceso, afortunadamente no se vislumbra que el señor Fabio Leonardo Villarreal haya tenido secuelas en su corporeidad que afecten directamente su estilo de vida, su relación con los demás o consigo mismo, pero pese a ello realiza una desmesurada solicitud indemnizatoria que supera con creces el rubro reconocido en casos de secuelas de gran envergadura. Por otro lado, es manifiesto que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psíquica o física que el impide o dificulta gozar de actividades rutinarias que disfrutaba antes del hecho lesivo. No obstante, se insiste en que dicha pretensión se estructura en meras enunciaciones y carece de cualquier fundamento para su reconocimiento y tasación.

Por lo anteriormente mencionado, en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, no pueden ni deben ser indemnizados por mi representada el supuesto daño a la vida de relación que alega el demandante, ya que, su presunta causación no se encuentra debidamente probada en ninguna de las modalidades por perjuicio extrapatrimonial, porque no hay prueba suficiente más que su propio dicho, sobre la presunta alteración en las actividades lucrativas, pero no se ha acreditado cuales actividades y la razón objetiva del impedimento de realizarlas. Es acertado indicar entonces que, por lo antes expuesto, resulta abiertamente indebida e injustificada la pretensión de la parte activa de la litis.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción

* 1. **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE SANDRA MARÍA JIMÉNEZ ÁVILA.**

Propongo esta excepción, por cuanto en el presente caso no existe prueba idónea que acredite la relación afectiva filial de la demandante Sandra María Jiménez Ávila con el señor Fabio Leonardo Villarreal. Lo anterior, toda vez que la accionante solicita el reconocimiento de perjuicios a título de compañera permanente del lesionado, sin acreditar de manera idónea tal situación. Lo anterior, puesto que como lo indicaré a profundidad más adelante, la ley y la jurisprudencia han establecido cuáles son las pruebas idóneas para acreditar dicha relación, sin que ninguna de las enunciadas legalmente se encuentre en este expediente para probar dicho vínculo.

En este punto es importante recordar que obligación de acreditar la calidad en que se actúa en determinada actuación judicial, está relacionada con la legitimación en la causa, concepto que ha sido definido ampliamente por la jurisprudencia, como aquella titularidad de los derechos de acción y contradicción. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado sobre esta categoría jurídica lo siguiente:

*“La prosperidad de la pretensión depende, entre otros requisitos según la jurisprudencia de esta Sala, de que «se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado (...). Si* ***el demandante no es titular del derecho que reclama*** *o el demandado no es persona obligada,* ***el fallo ha de ser adverso a la pretensión de aquél****, como acontece cuando reivindica quien no es el dueño o cuando éste demanda a quien no es poseedora[[28]](#footnote-28)”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

En mérito de lo expuesto, se advierte que la legitimación en la causa es un presupuesto sustancial de la sentencia de fondo en tanto permite establecer si al sujeto reclamante le asiste titularidad con el derecho pretendido. De manera que para que se predique su existencia, el sujeto que comparece al proceso debe comprobar la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso, de lo contrario sus pretensiones están llamadas al fracaso.

Del anterior análisis jurisprudencial y del estudio realizado al acervo probatorio del proceso, se advierte la ausencia de legitimación en la causa por activa de Sandra María Jiménez Ávila, puesto que al interior del plenario no obra prueba idónea que acredite la relación afectiva de la demandante con el señor Fabio Leonardo Villarreal. En este orden de ideas, al no existir prueba idónea de tal calidad no resulta procedente el reconocimiento de ningún emolumento pretendido por la demandante. Al respecto, se resalta que la Ley 979 de 2005 estableció los medios de prueba pertinentes para acreditar la existencia de la unión marital de hecho y en este sentido, la condición de compañero/a permanente, los cuales se restringen a los establecidos en el artículo en mención:

*“ARTÍCULO 2. El artículo 4 de la Ley 54 de 1990, quedará así:́*

*Artículo 4. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos:*

*1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes.*

*2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.*

*3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia.”*

Sin embargo, en este caso no existe prueba idónea de la cual se puede derivar la existencia de la unión marital de hecho entre Sandra María Jiménez Ávila y el señor Villarreal Gamba. Por lo tanto, la señora Sandra María Jiménez Ávila no está legitimada en la causa para ejercer la acción que nos ocupa, por no demostrar la relación afectiva que pretende hacer valer en este proceso. Razón por la cual, no es jurídicamente procedente declarar indemnización alguna a su cargo, por los hechos de este litigio.

En conclusión, al interior de este proceso no resulta jurídicamente procedente condenar a la parte demandada al reconocimiento de suma alguna a título de indemnización a favor de Sandra María Jiménez Ávila, puesto que es claro que la demandante no está legitimada en la causa por activa para ejercer la presente acción. En tanto, en el expediente no obra prueba idónea de la calidad de compañera permanente que asegura tener con el señor Fabio Leonardo Villarreal. En tal virtud, al no encontrarse prueba que acredite la relación afectivo filial de la demandante con el señor Peña Paniagua, las pretensiones necesariamente deberán ser denegadas.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al despacho declarar probada esta excepción.

# GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito al señor Juez declarar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso en los términos del artículo 282 del C.G.P. y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo del extremo pasivo de la litis y que pueda configurar otra causal que la exima de toda obligación indemnizatoria.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

**CAPITULO V**

**EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO**

1. **INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.**

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, por cuanto operó una causal eximente de responsabilidad frente a los demandados. Adicionalmente, debido a que no se acreditó la cuantía de la pérdida, es claro que no nació la obligación de indemnizar por parte de la Compañía de Seguros.

Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte Demandante, quien en la relación contractual tiene la calidad de beneficiaria. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

“***ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.***

*El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad*.” (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

*“Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”*

*“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro,* ***el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su perdida.*** *(…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago…[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”*

*“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080)[[29]](#footnote-29) ” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que, de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia:

“*2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.*

* 1. *En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).*
  2. *Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (…), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).*

*2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario*” (art. 1089, ib.)[[30]](#footnote-30)”.

La Corte Suprema de Justicia, ha establecido la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

“(…) ***Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio.*** *En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios[[31]](#footnote-31)*” (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte Demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1077 del C. Co. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del Asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077 del C.Co, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

1. La no realización del Riesgo Asegurado.

Sin perjuicio de las excepciones de la contestación de la demanda, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza Seguro Autoplus AA000909, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante la póliza en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la Aseguradora cubre la Responsabilidad Civil Extracontractual atribuible al Asegurado nombrado en la carátula de la póliza cuando este deba asumir un daño derivado de una reclamación basada en una responsabilidad de carácter extracontractual y de la cual se pretenda obtener una indemnización.

Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró, pues se está ante una ausencia de prueba del nexo causal. En efecto, no podrá atribuirse responsabilidad a los Demandados como quiera que no existe prueba cierta que acredite que los daños alegados por la parte demandante ocurrieron como consecuencia de las actuaciones de la conductora del vehículo de placas RCU-413. Pues como ya se indicó, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que pruebe la hipótesis planteada en la demanda y el IPAT y por esa razón, no podrá confirmarse la existencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la Aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la Responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, los Demandantes no lograron estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de las demandadas y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no existe nexo causal por haber operado el “Hecho exclusivo de la víctima”. Como consecuencia de ello, no hay obligación condicional por parte de la Aseguradora.

1. Acreditación de la cuantía de la pérdida.

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, toda vez la parte demandante solicita, en relación al perjuicio patrimonial el reconocimiento de lucro cesante cuando es más que claro que se han estructurado dichas sumas a partir de hipotéticos entre tanto no obra prueba alguna de los presuntos ingresos mensuales fijos que se advierte percibía el señor Fabio Leonardo Villarreal, es decir, del material probatorio adjunto solo se evidencian meras expectativas y promesas a futuro de la demandante. Es así que las sumas pretendidas son distantes a la realidad y por demás carecen de un mero sustento sobre su existencia.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse en primera medida que la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Al contrario, se observa que, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró, pues se está ante una ausencia de prueba del nexo causal. En efecto, no podrá atribuirse responsabilidad a los Demandados como quiera que no existe prueba cierta que acredite que los daños alegados por la parte demandante ocurrieron como consecuencia de las actuaciones de la conductora del vehículo de placas RCU-413. Pues como ya se indicó, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que pruebe la hipótesis planteada por el demandante resaltando que el Informe Policial de Accidente de Tránsito aportado no constituye una prueba de fondo con relación al hecho y en el mismo se plasma una mera hipótesis y por esa razón, no podrá confirmarse la existencia de un nexo causal entre los daños alegados por la parte Demandante y las conductas de los Demandados.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción

1. **RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA SEGURO AUTOPLUS AA000909**

En materia de seguros, el asegurador según el Artículo 1056 del C.Co podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (arts. 1056 y 1127 del C. de Co.), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la Póliza Seguro Autoplus AA000909en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones, las cuales enuncio a continuación, porque de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada:

*“1.1. EXCLUSIONES PARA TODAS LAS COBERTURAS*

*La Equidad no realizará ninguna indemnización para todas las coberturas en los siguientes casos y eventos:*

*• Cuando el vehículo se encuentre con sobrecupo, tanto de carga como de pasajeros.*

*• No se indemnizará bajo esta póliza, las multas, los gastos y los costos de llevar un proceso judicial en curso por el asegurado por medidas penales o de la policía, así sean consecuencia de un hecho cubierto por la presente póliza.*

*• Cuando el vehículo se emplee para uso distinto al estipulado en esta póliza, sea alquilado se destine a la enseñanza de conducción o participe en competencia o entrenamiento automovilístico de cualquier índole o partícipe en apuestas o desafíos, o que con el mismo*

*se busque algún lucro o preste servicios de transporte a través de plataformas tecnológicas.*

*• Cuando el vehículo sea conducido por una persona sin licencia de conducción y/o que no se encuentre vigente.*

*• Para todos los amparos, excepto la pérdida parcial por daños y pérdida total por daños, no se cubre la afectación de ninguna de las coberturas contratadas, cuando el siniestro sea consecuencia de un abuso de confianza, estafa o extorsión, de acuerdo con su definición legal, cometido en contra del asegurado.*

*• Pérdidas o daños causados a la carga o elementos transportados en el vehículo asegurado.*

*• Pérdidas o daños al vehículo por causa directa o indirecta de guerra, declarada o no sea interior o exterior, revolución, rebelión, sedición, asalto o secuestro del vehículo asegurado, o por actos de fuerzas extranjeras.*

*• Pérdidas o daños como consecuencia directa o indirecta de reacción o radiación nuclear o contaminación radioactiva.*

*• Cuando se transporte mercancías peligrosas, inflamables, explosivas y/o ilícitas.*

*• Cuando el vehículo asegurado sea usado o aprehendido por cualquier acto de autoridad, o sea secuestrado, o decomisado, excepto cuando se trate de un evento amparado bajo alguna de las coberturas.*

*• Cuando exista mala fe del asegurado o del beneficiario en la presentación del reclamo, o cuando para obtener el pago de la indemnización presente documentos falsos y/o actos dolosos.*

*• Cuando el vehículo es usado dentro de las instalaciones internas de los aeropuertos.*

*• Los daños causados con la carga que transporte el vehículo asegurado, salvo en caso de choque o vuelco.*

*1.2.2. EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL*

*-¿Qué no cubre?•*

*Muerte o lesiones a personas que en el momento del accidente se encontraren reparando o atendiendo el mantenimiento o servicio del vehículo.*

*• Lesiones o muerte causadas al cónyuge o compañero (a) permanente o los parientes del asegurado por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado y primero civil.*

*• Daños causados con el vehículo a la carga o a cosas transportadas en él o a bienes sobre los cuales el asegurado, su cónyuge o sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y primero civil, tenga la propiedad, posesión o tenencia.*

*• La conducción del vehículo por personas no autorizadas, como el caso de hurto o un abuso de confianza.*

*• Cuando el tomador, asegurado o conductor se declare responsable o efectúe arreglos, transacciones o conciliaciones sin consentimiento escrito previo de La Equidad.*

*• Los perjuicios ocasionados por el asegurado que estén cubiertos por el Seguro Obligatorio de Daños Corporales Causados a las Personas en Accidente de Tránsito (SOAT), ADRES o por el sistema general de seguridad social en salud, riesgos laborales y pensiones.”*

Teniendo en cuenta lo anterior, es menester señalar que, si durante el proceso se logra establecer la ocurrencia de alguna otra de las exclusiones arriba señaladas o cualquiera de las que constan en las condiciones generales, la póliza no podrá ser afectada, en tanto la situación se encontraría inmersa en una exclusión. Así las cosas, de configurarse alguna de ellas no podrá existir responsabilidad en cabeza del Asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la Póliza Seguro Autoplus AA000909, pues las partes acordaron pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del Asegurador. Por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la Póliza Seguro Autoplus AA000909, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la Póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

1. **CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGURO.**

Teniendo en cuenta las exposiciones contenidas en este escrito, es evidente que las partes, entiéndase, Rosmary Pamplona Farfán en calidad de propietaria del vehículo de placas RCU-413 y quien ostenta la calidad de tomadora y asegurada en la póliza Seguro Plus AA000909, Yuly Paola García en calidad de la conductora del vehículo asegurado, La Equidad Seguros Generales O.C. y el señor Fabio Leonardo Villarreal Gamboa celebraron un acuerdo transaccional debidamente firmado y autenticado con fecha del 23 de diciembre de 2022, dentro del cual se indicó tácitamente que la indemnización pagada por la compañía aseguradora corresponde a una indemnización integral que satisface todos los daños y perjuicios ocasionados en el accidente de tránsito ocurrido el 4 de octubre de 2022 y con el cual ciertamente el señor Villarreal Gamboa declaró cancelada la obligación de resarcir perjuicios liberando de cualquier acción de responsabilidad a La Equidad Seguros Generales O.C., así como a Rosmary Pamplona Farfán y a la conductora del vehículo de placas RCU-413, de manera que reconocer cualquier suma transgrede el principio indemnizatorio de los contratos de seguro.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al riesgo asumido. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

*“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la tolerancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”[[32]](#footnote-32)*

Se puede concluir entonces que el Contrato de Seguro tiene un carácter meramente indemnizatorio y por tal motivo, tiene como finalidad llevar a la víctima al estado anterior, más no enriquecerla. Es por ello que, aterrizando al caso en cuestión, no es de recibo indemnizar el daño tal y como fue pretendido por la parte Demandante, más aún, teniendo en cuenta las tasaciones exorbitantes de sus perjuicios no probados. En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

“***Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento.*** *La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso*” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Conforme a ello, en caso de pagarse suma alguna que no esté debidamente acreditada por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Asegurado y eventualmente enriqueciendo a los accionantes.

No puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo tiene a un carácter meramente indemnizatorio. Así las cosas, de efectuar cualquier pago por concepto lucro cesante, pese a que no está probado el valor de los ingresos y son claramente hipotéticos, indiscutiblemente transgrediría el principio indemnizatorio que rige en los contratos de seguro.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que dentro del plenario no se demostraron los perjuicios solicitados en el pétitum de la demanda, su reconocimiento claramente vulneraría el principio indemnizatorio. Lo anterior, por cuanto en primer lugar, es inviable reconocer emolumento alguno referente al lucro cesante, puesto que se no se probó de la más mínima forma el presunto ingreso dejado de percibir ante la ocupación de vendedora informal que se enuncia de la señora Doris Ramírez. En consecuencia, reconocer los perjuicios tal y como fueron solicitados, transgrediría el carácter meramente indemnizatorio que reviste a los contratos de seguro. En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al señor juez, declarar probada la presente excepción.

1. **EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.**

 En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza que hoy nos ocupa sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de La Equidad Seguros Generales O.C. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores y de igual forma, se deberá tener en cuenta el deducible pactado en el contrato. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

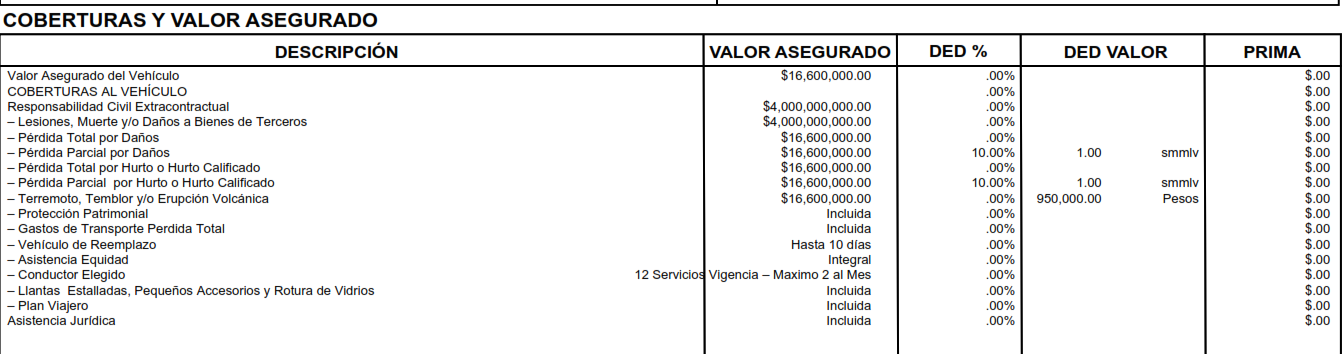
 En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

***“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA****. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.*

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación,* ***el valor de la prestación a cargo de la aseguradora****, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños,* ***se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado****, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”[[33]](#footnote-33)* (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

 Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la Aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza, así:



En este punto es preciso resaltar que el valor asegurado en la póliza se aplica de conformidad con lo señalado en el condicionado particular de la póliza en el que se indica que el límite para el valor asegurado por evento es de $4.000.000.000, como se establece en la carátula de la referida póliza.

Por lo anterior, rrespetuosamente solicito al Honorable Despacho considerar que, en el caso bajo análisis, La Equidad Seguros Generales O.C. no puede ser condenada por un monto mayor al expresamente establecido en la Póliza, de acuerdo con su clausulado. Es de suma importancia que el Honorable Juzgador tenga en cuenta los límites y valores asegurados contenidos en dicha póliza en el remoto e improbable evento de una condena contra mi representada.

## PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO

Respetuosamente solicito a su señoría que declare que se ha configurado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1081 y 1131 del C.Co. En este caso el hecho imputable al asegurado, esto es el accidente de tránsito, ocurrió el 4 de octubre de 2022 y a partir de esta fecha inició a correr el término de prescripción ordinaria que de acuerdo al artículo 1081 del C.Co es de dos años. Luego, si se acredita que se formuló la demanda en contra de mi representada después de dicho hito temporal, encontraríamos acreditada la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro.

El Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros, y en su artículo 1081 establece previsiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Dicho precepto establece lo siguiente:

*“****ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>.*** *La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.*

*La prescripción ordinaria* ***será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción****.*

*La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes.”* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por otro lado, en lo atinente a los seguros de responsabilidad, para evaluar la prescripción derivada del contrato de seguro es necesario analizar el artículo 1131 del Código de Comercio que establece:

***“ARTÍCULO 1131. OCURRENCIA DEL SINIESTRO.******En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro****en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado,* ***fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima****. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.”* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Así, deberá en los seguros de responsabilidad entenderse ocurrido el siniestro en el momento en ocurra para la víctima. Al respecto ha precisado la Corte Suprema de Justicia:

*“Rememórese que,* ***según el artículo 1131 del Código de Comercio, modificado por la ley 45 de 1990, en los seguros por responsabilidad se entiende «ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado...», momento que, además de ser el jalón para el comienzo del término prescriptivo****, debe estar incluido en el plazo de vigencia de la póliza respectiva.”.*

*(…)*

*“Para señalar, por ejemplo,* ***el debate del gobierno del artículo 1131 del Código de Comercio, en materia de prescripción por las imprecisiones que pudo presentar al aprobarse o ponerse en vigencia en 1971 el Código de Comercio Nacional vigente, al distinguir la fecha del siniestro para el asegurado y la víctima como factores detonantes de la prescripción****, con la Ley 45 quedaron zanjadas todas las dudas o diferencias, en relación con los arts. 1081 del C. de Co. y 2536 del C.C., desapareciendo todo desequilibrio entre víctima, asegurado y aseguradora en el punto prescriptivo.” [[34]](#footnote-34)(subrayado fuera del texto original)*

De modo que resulta claro, que el término bienal para que opere la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro deberá empezar a contarse desde el momento en que ocurren los hechos imputables al asegurado. Así lo ha expuesto la Corte y lo ha confirmado en diversos planteamientos jurisprudenciales que dan cuenta de que es la fecha de los hechos imputables al asegurado la que marca el hito temporal a partir del cual deberá empezar a contarse el término bienal de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro para la víctima.

En conclusión, no existiría duda alguna que ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro que se encuentra en cabeza del demandante en los términos de los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio. Por cuanto es claro que, si se llega a probar que el término prescriptivo feneció con creces, al haber transcurrido más de dos años desde el 4 de octubre de 2022, fecha en la que ocurrieron los hechos objeto de litigio, hasta la fecha en que se radicó la demanda y se tuvo por notificada a la compañía, es claro que dicha prescripción deberá declararse en los términos de los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio.

1. **GENÉRICA O INNOMINADA**

Solicito al señor Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la Ley o en el Contrato con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y prescripción contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio y cualquier otra causal que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo de las entidades demandadas y se la exima de toda obligación indemnizatoria, ello en atención a lo reglado por el artículo 282 del Código General del Proceso.

**CAPÍTULO VI**

**PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRUEBAS DEL DEMANDANTE**

1. **RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.**

El artículo 262 del Código General del Proceso faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria, y en tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante en tanto no se obtenga su ratificación, y entre ellos, de manera enunciativa enumero los siguientes:

* Certificación laboral expedida por la empresa Miguel Caballero MC Armor a nombre de Fabio Leonardo Villarreal Gamba y suscrita por Liz Dayana Salamanca Acevedo.

**CAPÍTULO VII**

**MEDIOS DE PRUEBA**

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

# DOCUMENTALES

* 1. Copia de la Póliza Seguro Autoplus AA000909, con su respectivo condicionado particular y general.
  2. Copia del documento con constancia de indemnización y paz y salvo debidamente firmado y autenticado con sus anexos.

# INTERROGATORIO DE PARTE.

* 1. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **FABIO LEONARDO VILLARREAL GAMBA** en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El señor Villarreal podrá ser citado por intermedio de su apoderado o en su defecto en la carrera 14A # 151- A39 torre 1 apto 1202, celular: 3133332080 y al correo electrónico: [leonardo\_villarreal@hotmail.com](mailto:leonardo_villarreal@hotmail.com)
  2. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la señora **SANDRA MARÍA JIMÉNEZ ÁVILA** en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La señora Jiménez podrá ser citada por intermedio de su apoderado o en su defecto en la carrera 14A # 151- A39 torre 1 apto 1202, celular: 3112303419 y al correo electrónico: [samariaja@hotmail.com](mailto:samariaja@hotmail.com)
  3. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la señora **ROSMARY PAMPLONA FARFÁN** en su calidad de Demandada, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La señora Pamplona podrá ser citada en la dirección Calle 137 # 23-16 apto 502, celular: 3192497222 y al correo electrónico: [rospam@hotmail.com](mailto:rospam@hotmail.com)
  4. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la señora **YULY PAOLA GARCÍA PAMPLONA** en su calidad de Demandada, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La señora García podrá ser citada en la dirección Calle 137 # 23-16 apto 502, celular: 3194297222 y al correo electrónico: [rospam@julezz.garcia@gmail.com](mailto:rospam@julezz.garcia@gmail.com).

1. **DECLARACIÓN DE PARTE**

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y especialmente, para exponer y aclarar los amparos, exclusiones, términos y condiciones de la Póliza Seguro Autoplus AA000909

1. **TESTIMONIALES**
   1. Solicito se sirva citar a la doctora **MARÍA CAMILA AGUDELO ORTÍZ**, asesora externa de mi representada con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda, así como de los fundamentos de hecho y derecho sobre la Póliza Seguro Autoplus AA000909. Este testimonio se solicita igualmente para que deponga sobre las condiciones particulares y generales de la Póliza y en general, sobre las excepciones propuestas frente a la demanda.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las características, condiciones, tratativas preliminares, vigencia, coberturas, etc., del Contrato de Seguro objeto del presente litigio. La Doctora podrá ser citado en la Calle 22D No. 72-38 de la ciudad de Bogotá y al correo electrónico [camilaortiz27@gmail.com](mailto:camilaortiz27@gmail.com).

1. **DICTAMEN PERICIAL**

Comedidamente anuncio que me valdré de prueba pericial de reconstrucción de accidente de tránsito a fin de ofrecer al despacho una ampliación frente a las circunstancias en las cuales se presentó el accidente, realizando un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que obran en el expediente, para finalmente realizar un estudio de los factores que, según su experticia, determinen la causa eficiente del mismo, entre otros, la trayectoria del vehículo y la motocicleta, condiciones de la vía, condiciones climáticas, visibilidad del vehículo, etc. Esta se solicita y se anuncia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 227 y 228 del Código General del Proceso, pues a la fecha no me es posible aportarla dada la complejidad técnica del mismo.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a un mes con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior termino, se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida.

El dictamen es conducente, pertinente y útil, teniendo en cuenta que el mismo podrá aclarar las circunstancias fácticas que intervinieron en el accidente de tránsito, las cuales, una vez analizadas, podrán determinar la causa eficiente del mismo.

1. **RATIFICACIÓN Y POSIBILIDAD DE INTERROGAR TESTIGOS:**

Ruego señor Juez me permita la ratificación la posibilidad de contrainterrogar los testigos de la demandante.

**CAPÍTULO VIII**

# ANEXOS

1. Pruebas relacionadas en el acápite de pruebas.
2. Certificado de existencia y representación legal de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. expedido por la Cámara de Comercio de Cali, en el que consta el poder otorgado al suscrito.

**CAPÍTULO IX**

# NOTIFICACIONES

La parte actora en el lugar indicado en la demanda.

Mi representada LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., recibirá notificaciones en la Carrera 9ª No. 99 – 07 Piso 12-13-14-15 en Bogotá D.C.

**Correo electrónico**: [notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop](mailto:notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop)

Al suscrito en la ciudad de Bogotá D.C. en la Carrera 11A # 94A - 23 oficina 201, Edificio Calle 94A o en la dirección electrónica: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Atentamente,

# GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

1. Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC5885-2016, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Citada en Compendio el daño extrapatrimonial y su cuantificación [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Suprema de Justicia. Sentencia Radicado 2000-01141 de 24 de junio de 2008. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 2018. Mp. Margarita Cabello Blanco. EXP: 2007-0299 . [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. Mp Luis Armando Tolosa Villabona. EXP: 2011-0736. [↑](#footnote-ref-4)
5. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad C 993 de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC 11287 – 2019. Agosto 17 de 2019. [↑](#footnote-ref-6)
7. Patiño, Héctor. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano”. Revista Derecho Privado N14. Universidad Externado de Colombia. 2008 [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 15 de enero de 2008. Expediente 87300. [↑](#footnote-ref-8)
9. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. SC7978-2015. Radicado 2008-00150 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria, MP. William Namén Vargas, del 24 de agosto de 2009. Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01. [↑](#footnote-ref-10)
11. Corte Suprema de Justicia Sentencia 6527 de 16 de marzo de 2001. MP Silvio Fernando Trejos Bueno. [↑](#footnote-ref-11)
12. Corte Suprema de Justicia Sentencia 5462 de 2000 MP José Fernando Ramírez Gómez. [↑](#footnote-ref-12)
13. Corte Suprema de Justicia Sentencia 3001 de 31 de enero de 2005 MP Pedro Octavio Munar Cadena. [↑](#footnote-ref-13)
14. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Radicación No. 3579. No publicada. [↑](#footnote-ref-14)
15. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 11001-31-03-032-2011-00736-01. Junio 12 de 2018 [↑](#footnote-ref-15)
16. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 07 de diciembre de 2017. M.P. Margarita Cabello Blanco. SC20448-2017 [↑](#footnote-ref-16)
17. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 2018. MP. Margarita Cabello Blanco. EXP: 2007-0299 [↑](#footnote-ref-17)
18. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. MP Luis Armando Tolosa Villabona. EXP: 2011-0736. [↑](#footnote-ref-18)
19. Corte Suprema de Justicia. Sentencia Radicado 2000-01141 de 24 de junio de 2008. [↑](#footnote-ref-19)
20. Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC780-2020, M.P. Ariel Salazar Ramírez [↑](#footnote-ref-20)
21. Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC5885-2016, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Citada en Compendio el daño extrapatrimonial y su cuantificación [↑](#footnote-ref-21)
22. Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC780-2020, M.P. Ariel Salazar Ramirez [↑](#footnote-ref-22)
23. Corte Suprema de Justicia, sentencia SC4703-2021, Radicación: 11001-31-03-037-2001-01048-0l, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona [↑](#footnote-ref-23)
24. CSJ CS de 18 de septiembre de 2009, exp. 2005-00406-01. Cfr. se665 de 7 de marzo de 2019, exp.2009-00005-01. [↑](#footnote-ref-24)
25. CSJ SC de 5 de mayo de 1999, exp. 4978. [↑](#footnote-ref-25)
26. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC5340-2018 de 7 de diciembre de 2018. Magistrado Ponente: Arnoldo Wilson Quiroz Monsalvo. [↑](#footnote-ref-26)
27. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, radicado

    11001-3103-006-1997-09327-01. [↑](#footnote-ref-27)
28. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC 6279-2016. Noviembre 11 de 2016. [↑](#footnote-ref-28)
29. ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sentencia SC2482-2019 de 9 de julio de 2019, Radicación n.° 11001-31-03-008-2001-00877-01. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. MP: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO [↑](#footnote-ref-30)
31. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 1100131030241998417501 [↑](#footnote-ref-31)
32. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065 [↑](#footnote-ref-32)
33. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952. [↑](#footnote-ref-33)
34. Corte Suprema de Justicia, SC 130-180 del 12 de febrero de 2018, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. [↑](#footnote-ref-34)